



IV LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

IV. LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

En este apartado se destacan los principales logros institucionales alcanzados en el período que comprende este Informe de Labores, que se encuentran en función de las áreas estratégicas de la planificación institucional presentadas en el capítulo anterior. El objetivo del capítulo es comentar la ejecución de proyectos, mostrar datos estadísticos de las actividades rutinarias y el número de población beneficiada de los servicios prestados por esta Procuraduría.

4.1 Protección de los derechos humanos

De acuerdo a lo establecido en el PEI-2015-2017, el eje estratégico relacionado con la Protección Integral de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales tiene como propósito fortalecer los mecanismos de asistencia y protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos en forma sistemática, oportuna, adecuada e integral.

En ese sentido se han definido como resultados estratégicos: a) el funcionamiento de los mecanismos de asistencia y protección de la PDDH con procedimientos oportunos, breves y sencillos, con predominio del trato directo con las víctimas y demás personas e instancias involucradas; b) el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la formulación de propuestas de reformas normativas, medidas de prevención e incidencia en políticas priorizadas, en orden a elevar el nivel de respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado; c) consolidar espacios de diálogo, coordinación y cooperación con organizaciones de la sociedad civil y grupos en condición de mayor vulnerabilidad; y, d) establecer mecanismos para la promoción de acciones ante sistemas internacionales de protección y seguimiento de sus recomendaciones, así como nexos de coordinación y cooperación con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

A continuación, se presentan los resultados de las actividades realizadas para alcanzar

los objetivos de protección de derechos humanos, de acuerdo al funcionamiento de los mecanismos, procedimientos y acciones que forman parte del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la PDDH, en las que participan las siguientes unidades organizativas: Departamento de Denuncias; Departamento de Procuración; Departamento de Seguimiento; Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores; Departamento de Observación Preventiva y Atención de Crisis; Departamento de VIH y Derechos Humanos; Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos; Departamento de Personas Adultas Mayores; Unidad de Atención Especializada para las Mujeres Víctimas de Violencia; Unidad de Género Institucional; Departamento de Derechos Políticos; Departamento de Resoluciones; Departamento de Control de Procedimientos; Departamento de Atención a la Persona Migrante; Delegaciones Departamentales; Procuradurías Adjuntas Específicas; Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos; y Despacho de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

a) Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos

De acuerdo a la obligación legal de rendir anualmente un informe a la Asamblea Legislativa en el que se detallen las actuaciones en la protección de los derechos humanos (Artículo 49 de la Ley de la PDDH), se presenta un informe consolidado de las acciones ejercidas en el mecanismo de tramitación de casos de

presuntas violaciones a derechos humanos, que forma parte del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, para el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017.

Los resultados se obtienen de dos fuentes principales: la primera de los reportes automáticos generados por el Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG), que contiene una base de datos sobre denuncias admitidas, orientaciones brindadas, instituciones o autoridades denunciadas y derechos humanos presuntamente vulnerados, que son filtrados y consolidados a nivel nacional, departamental y municipal; y la segunda, de los informes de actividades realizadas por las unidades operativas del Sistema de Protección. En los siguientes párrafos se presentará el análisis del trámite de expedientes durante el período de referencia para el presente Informe.

En cuanto a las actividades en el área de protección de derechos humanos, durante el período de referencia se han realizado a nivel nacional un total de 14,566 acciones, de las cuales 9,551 son orientaciones; 1,833 denuncias admitidas; y 3,182 acciones inmediatas.

Cabe señalar que desde el inicio de su gestión, la señora Procuradora consolidó el mecanismo de asistencia a víctimas el cual puede realizarse a través de las siguientes modalidades: a) verificaciones in situ, las cuales son visitas al lugar de los hechos o donde se encuentre la víctima o víctimas con el fin de constatar actuaciones o condiciones de riesgo o hechos que posteriormente no puedan ser verificados; b) acompañamiento, se refiere a la guía, conducción o apoyo a las presuntas víctimas para la activación de procesos o trámites ante otras instancias u organismos competentes en la defensa de sus derechos; c) buenos oficios, son las gestiones ante la autoridad denunciada o competente con el objetivo de restituir o reparar integralmente y de manera inmediata los derechos presuntamente afectados; d) libramiento de oficios, que es la comunicación escrita, sencilla y expedita que puede librarse cuando la Procuraduría no sea competente

para conocer pero se estime necesario, por la naturaleza del mismo, informar a las autoridades o instituciones concernientes para que tomen las medidas que correspondan a sus atribuciones; para requerir informe o la adopción de medidas a la autoridad presuntamente responsable o al superior jerárquico; cuando el caso requiera la actuación inmediata de otras instancias competentes para que conozca del mismo; o para solicitar colaboración o apoyo de otras instituciones, organizaciones o personas; e) mediación: cuyo objeto es promover la solución de un conflicto, generalmente de naturaleza colectiva, facilitando el diálogo y entendimiento; f) medidas cautelares, son medidas excepcionales potestativas y de carácter preventivo que dicta el Procurador o Procuradora, o quien realice sus funciones, en casos de extrema gravedad y urgencia, a efecto de promover la protección de la víctima o víctimas ante un inminente daño irreparable o de difícil reparación, y; g) otras que disponga el Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones o persona delegada.⁶

En la siguiente tabla se desglosa la información antes detallada por delegación departamental.

Tabla N° 4
Actividades realizadas a nivel nacional en el área de protección de derechos humanos

Delegación	Orientaciones Legales	Denuncias Admitidas	Acciones Inmediatas
Ahuachapán	559	73	64
Cabañas	636	39	178
Chalatenango	346	34	122
Cuscatlán	732	52	558
La Libertad	434	115	216
La Paz	663	97	235
La Unión	791	92	57
Morazán	239	37	96
San Miguel	877	104	298
San Salvador	1,295	456	448

⁶ Artículo 16 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Delegación	Orientaciones Legales	Denuncias Admitidas	Acciones Inmediatas
San Vicente	390	73	157
Santa Ana	988	335	209
Sonsonate	365	214	266
Usulután	1,232	112	278
TOTAL	9,551	1,833	3,182

Fuente: Informes de actividades de las delegaciones departamentales, así como reportes del Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG)

Además, a nivel nacional se han emitido un total de 1,208 oficios; 572 resoluciones iniciales elaboradas; 2,346 resoluciones finales elaboradas de las cuales 283 han sido de responsabilidad, 427 de no responsabilidad, 1,395 de archivo, 145 de buenos oficios, 60 de acatamiento de recomendaciones, 33 de restitución de derechos, y 3 con recomendaciones. Agregado a lo anterior, también se han emitido 11 medidas cautelares y 1 censura pública.

Tabla N° 5
Tipo de documentos
emitidos a nivel nacional

Tipo de documento	Cantidad
Oficios	1,208
Resoluciones iniciales	572
Resoluciones finales	2,346
Medidas cautelares	11
Censura pública	1
Total	4,138

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH.

Los totales se refieren a proyectos de resoluciones iniciales y finales pendientes de firma, así como a resoluciones ya firmadas por la Procuradora.

i. Orientaciones legales

La figura de la orientación legal se encuentra regulada en los artículos 194, romano I, ordinal 3° de la Constitución; artículos 11, ordinal 3° y 26 ordinal 3° de la Ley de la

PDDH; 7 inc. 3° del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante, "Reglamento para la Aplicación de Procedimientos").

Esta modalidad de atención se aplica cuando los hechos denunciados no son competencia de la institución, pero se estima necesario asesorar a las personas usuarias sobre la activación oportuna de instancias administrativas o jurisdiccionales. Esta facultad legal puede llevar incluso, según la naturaleza de la orientación, a buscar una comunicación directa con las autoridades señaladas por medio de oficio o acciones inmediatas, a fin de que estas adopten las medidas de su competencia e informen sobre las mismas.

En este período, el personal jurídico atendió a nivel nacional 14,566 casos, de los cuales 9,551 correspondieron a orientaciones legales; al compararlo con el período anterior, se observa un aumento de 1,679 casos. Esa situación estaría indicando que las orientaciones legales continúan siendo una de las principales actividades institucionales de prevención de violaciones a los derechos humanos.

ii. Denuncias admitidas

La fase inicial del mecanismo de protección se encuentra regulada en los artículos 4 al 26 del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos. Éste comienza con la apertura de casos mediante denuncia o de manera oficiosa sobre hechos que impliquen presuntas afectaciones a derechos humanos, incluyendo un examen preliminar, el pronunciamiento inicial y otras comunicaciones oficiales.

En este período, a nivel nacional se admitieron 1,833 denuncias, de las cuales 1,732 fueron interpuestas de manera personal, telefónica, carta, electrónica y fax; y 101 iniciadas oficiosamente, ya sea por medio de informes, monitoreo de medios de comunicación y aviso.

El perfil de las personas denunciantes y de las víctimas se mantiene respecto de la

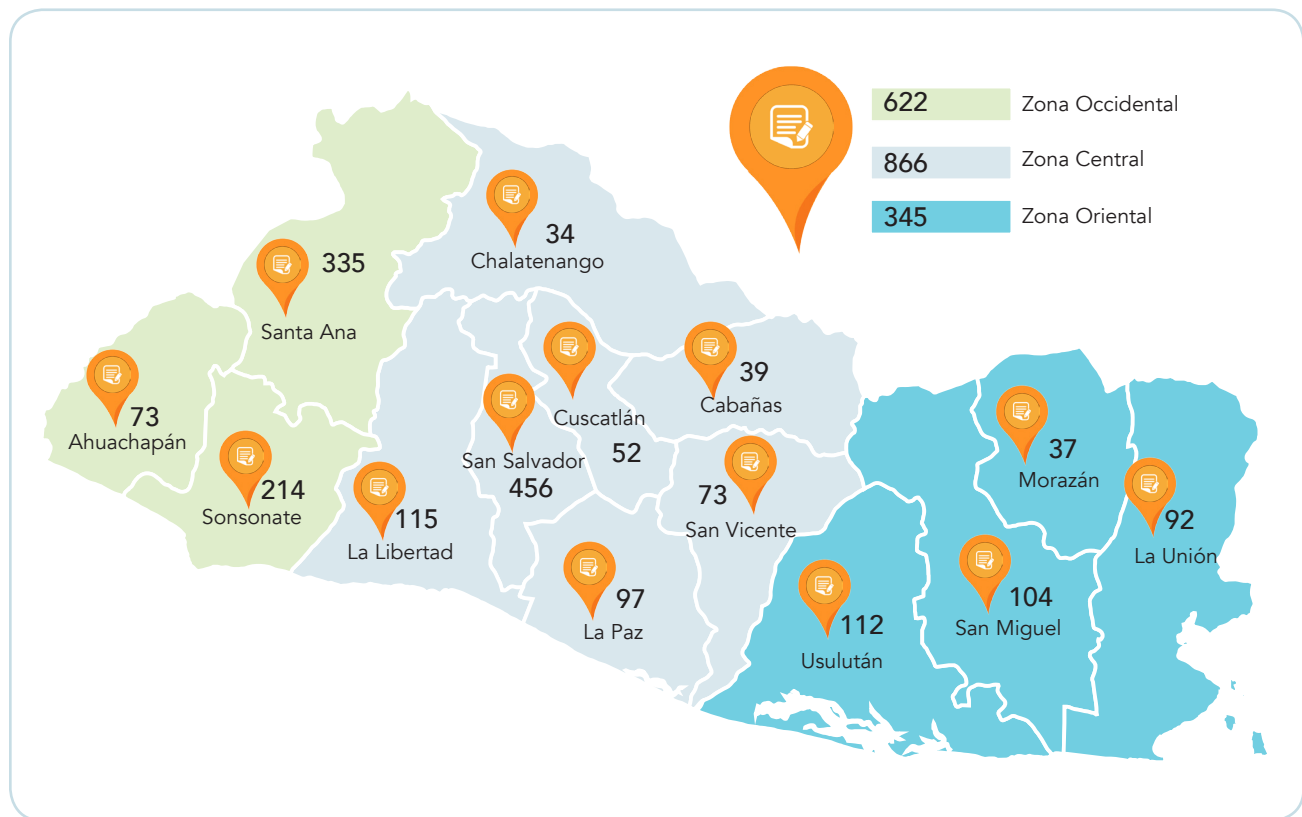
caracterización de años anteriores, en el sentido que en la mayoría de los casos son hombres los denunciadores y víctimas. Así, la cantidad de hombres víctimas duplica a la de mujeres; por otra parte, en cuanto al sexo de la persona denunciante, esta diferencia es más estrecha.

La naturaleza de los casos presentados o iniciados por oficios en su mayoría fue de naturaleza individual. De acuerdo al rango de edad, la mayoría de las víctimas se ubicaron entre las edades de 0 a 18 años; es decir, que están referidos principalmente a la población infantil, niños, niñas y adolescentes, seguido del grupo entre 25 a 60 años; en el caso de

los denunciadores, a diferencia de la anterior relación, se ubicó preferentemente en el rango de 25 a 60 años.

A nivel geográfico, el siguiente mapa presenta la distribución de denuncias admitidas por las trece delegaciones departamentales, así como las de sede central por medio de los Departamentos del Sistema de Protección, Procuradurías Adjuntas Específicas, Departamento de Verificación Penitenciaria, Departamento de Observación Preventiva y Atención de Crisis, Departamento de Atención a la Persona Migrante, Departamento de Derechos Políticos y personal jurídico de turno.

Mapa sobre denuncias admitidas por departamentos y regiones



Fuente: Reporte SIIG y Delegaciones Departamentales.

A nivel nacional, la zona central del país concentra la mayor cantidad de denuncias con 866 y el departamento de San Salvador se ubica con el mayor número de denuncias con 456 casos, seguido por la zona occidental en donde se registran 622 casos y, finalmente, le sigue la en la zona oriental en donde se reportaron 345 casos.

Derechos humanos más denunciados

Con respecto a la clasificación de denuncias sobre supuestas violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales, los derechos civiles se ubicaron nuevamente durante el periodo con la mayoría de casos con 1,496 denuncias; seguido de los derechos económicos, sociales y culturales con 338; los derechos de las mujeres con 154 y los derechos específicos de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad,

específicamente los derechos de niños y las niñas con 75; personas privadas de libertad con 58; medio ambiente con 24; las personas con discapacidad con 11; migrantes y personas adultas mayores con cuatro cada uno; y, de las personas consumidoras y de los pueblos indígenas, con uno cada uno. A continuación, se presentan en una gráfica los datos anteriores.

Gráfico N° 2
Recepción de casos según categoría de derecho más denunciada
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



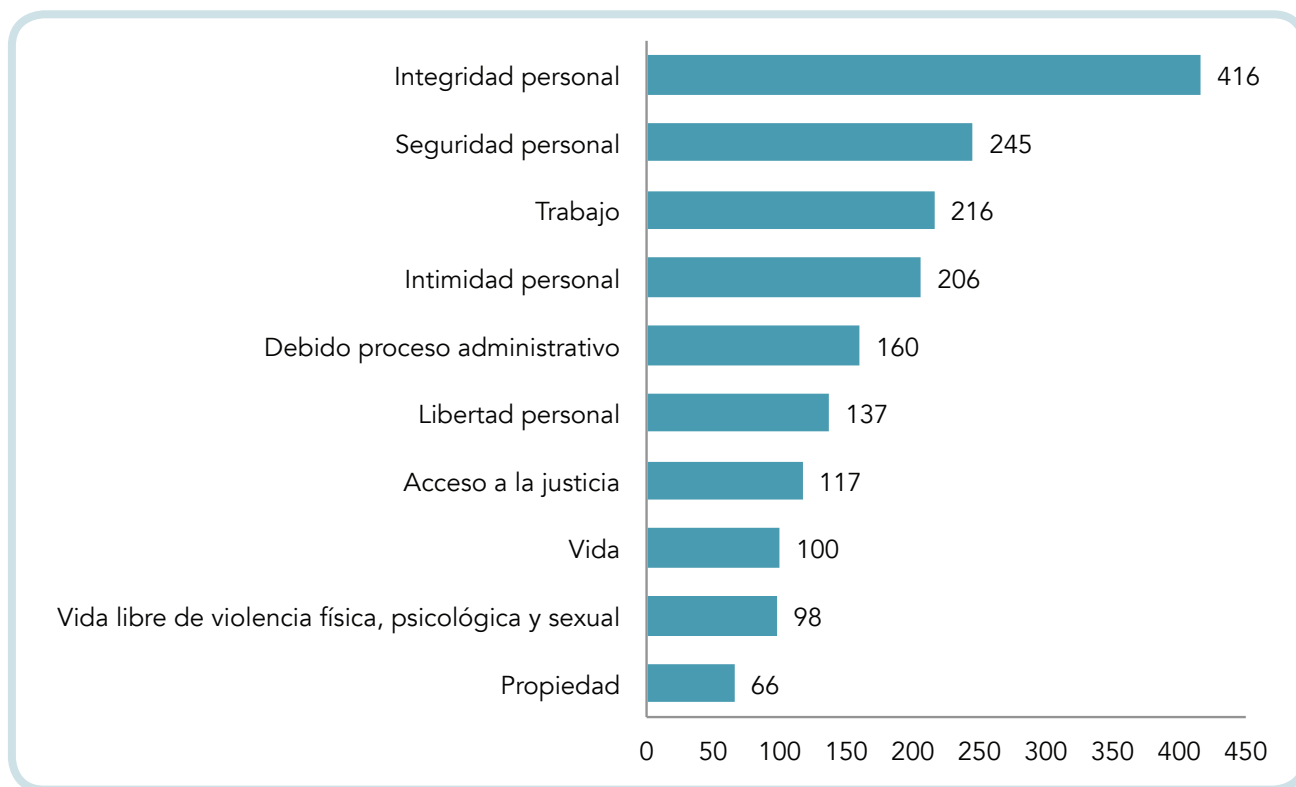
Fuente: Reporte de denuncias SIIG

Por otro lado, a nivel particular, se reportaron más denuncias sobre los derechos humanos tradicionalmente denunciados y el escalonamiento de algunos derechos a las primeras posiciones. Tal como se presenta en la gráfica n° 3, el derecho a la integridad personal se ubica como el más denunciados en 376 veces; luego el derecho a la seguridad personal con 218; el derecho a la intimidad personal con 198; derecho al trabajo con 170; el derecho al debido proceso administrativo con 138; el derecho a la libertad personal con 124; el derecho de acceso a la jus-

ticia con 101; el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 92; derecho a la vida con 78; el derecho a la propiedad con 54; entre otros.

Con el propósito de ilustrar los derechos específicos más denunciados se presenta la siguiente gráfica haciendo la consideración que la lista de derechos humanos se corresponde únicamente a los casos que registran los mayores niveles de incidencia.

Gráfico N° 3
Recepción de casos según derechos específicos más denunciados
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



Fuente: Reporte de denuncias SIIG

Debido a que en la clasificación de derechos humanos presuntamente violentados pueden identificarse uno o varios hechos violatorios, a continuación se hace el desglose respectivo con relación a los primeros cinco derechos específicos más denunciados. En primer lugar el derecho a la integridad personal, para el cual la mayoría de casos son atribuidos a los hechos violatorios de malos tratos (299); tratos crueles, inhumanos o degradantes (49); y, uso desproporcionado de la fuerza (44), entre otros. En el caso del derecho a la seguridad personal fue denunciado mayormente por persecuciones o indagaciones ilegales (118); por intimidación (86); y por coacción (26).

Asimismo, el derecho a la intimidad personal por allanamiento de morada y/o registro de manera ilegal o arbitraria (178); incorporación ilegal de datos personales a un registro determinado (11); realización de registros

indebidos (10), entre otros. El derecho al trabajo por actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral (122); denegación de prestaciones o derechos laborales (24); acoso laboral ejercido en los centros de trabajo (15); discriminación laboral y tolerancia estatal ante despidos ilegales (10 cada uno); actos atentatorios contra la estabilidad laboral por razón del sexo (9); y, restricción o denegación arbitraria del acceso al empleo (7), entre otros.

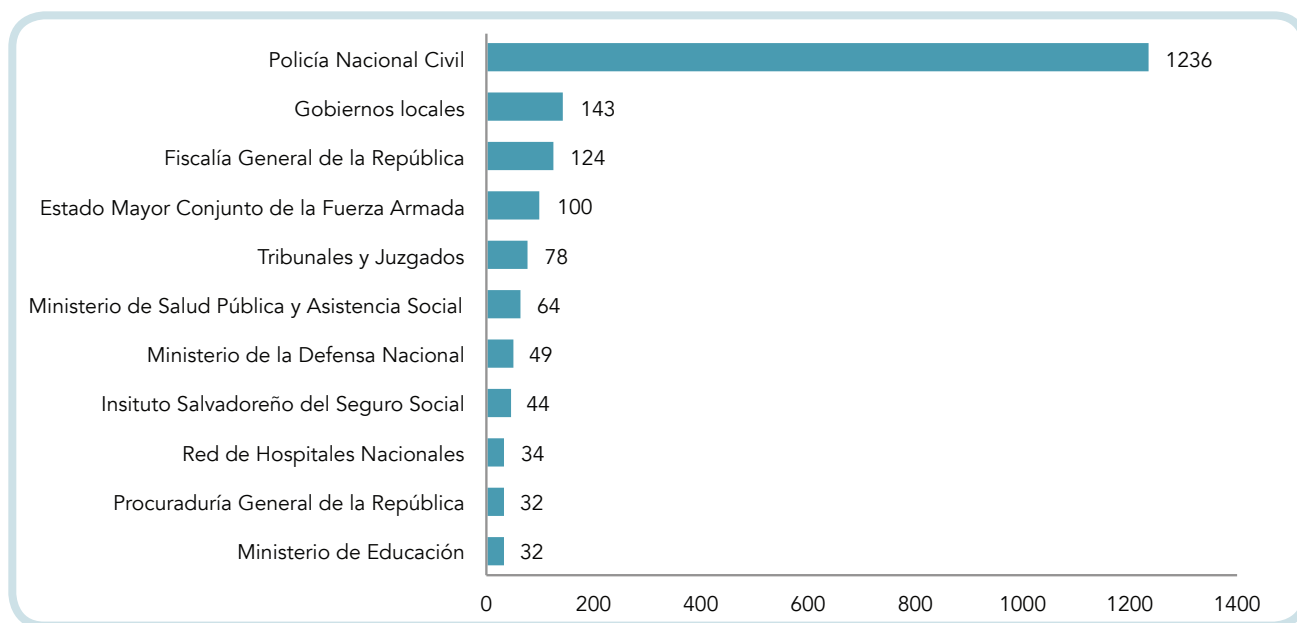
El derecho a un debido proceso administrativo por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica (63); inobservancia del principio de transparencia (17); inobservancia del derecho de audiencia (15); inobservancia del derecho de defensa (14); inobservancia del principio de igualdad y no discriminación (9); e, inobservancia del principio de eficacia procesal (8 cada uno); entre otros.

■ Instituciones estatales más denunciadas

Por otro lado, al observar el reporte por institución denunciada, el SIIG refleja que la institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos es la Policía Nacional Civil (PNC) con 1,236; seguida de los Gobiernos locales con 143; de la Fiscalía General de la República con 124; el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada

con 100; los Tribunales y Juzgados con 78; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 64; el Ministerio de la Defensa Nacional con 49; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con 44; la red de hospitales nacionales con 34; y, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación con 32 cada uno, principalmente.

Gráfico N° 4
Recepción de casos según instituciones públicas más denunciadas
1 de junio de 2016 a 30 de abril de 2017



Fuente: Reporte de denuncias SIIG

Esta Procuraduría acumuló gran cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los derechos civiles, tal como se ha mencionado anteriormente; esta tendencia se observa también a nivel de instituciones públicas denunciadas. A continuación, se hace el desglose de las tres instituciones con mayor nivel de denuncias por hechos violatorios.

En primer lugar, se ubica la Policía Nacional Civil con 1,236 señalamientos, de los cuales 347 fueron por presuntas violaciones a la integridad personal; 206 a la seguridad personal; 182 a la intimidad; 110 a la libertad personal; 74 a la vida; 56 a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual; 49 a la propiedad; 46 al debido proceso administrativo; entre otros.

Seguidamente se posicionan para este período los gobiernos locales con 143 señalamientos, en particular se recibieron 47 señalamientos por el derecho al trabajo; 31 por inobservancia al debido proceso administrativo; 11 por el derecho a la integridad personal; 10 por el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual; 9 por el derecho a la protección del medio ambiente, entre otros.

Finalmente se ubica la Fiscalía General de la República con 124 señalamientos que tienen que ver con el derecho al acceso a la justicia con 56; al debido proceso administrativo con 19; a la libertad personal con 8; a la seguridad personal con 7, a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual y derechos de petición con 5 cada uno; entre otros.

iii. Acciones inmediatas

Las acciones inmediatas están contempladas en los artículos 15 y 16 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, y ellas pueden dar lugar a la realización de acciones como verificaciones in situ, acompañamientos, interposición de buenos oficios, libramiento de oficios, mediaciones, emisión de medidas cautelares u otras acciones que decida la Procuradora o quien realice sus funciones.

Éstas comenzaron a implementarse a partir de septiembre de 2014, y entre las fechas que comprende el presente informe de labores se realizaron 3,182 gestiones a nivel nacional que han permitido resolver de forma ágil las diferentes problemáticas planteadas por las personas usuarias que acuden a esta Procuraduría. Estas gestiones suponen la aplicación directa del mandato de la PDDH para asistir a las presuntas víctimas y ofrecer una solución oportuna; de igual manera se traducen en el cese de una violación a derechos humanos o restitución del derecho vulnerado mediante verificación y gestión de buenos oficios. En otros casos, a través de ellas se han obtenido elementos de información que permiten sustentar el inicio de expedientes.

Las materias y áreas abordadas en las gestiones de acciones inmediatas han sido diversas y, para mencionar algunas, versan sobre tema penitenciario, penal, familia, laboral, salud, medio ambiente, debido proceso, educación, derechos de la niñez, entre otros. En total, se han realizado 2,078 verificaciones; 352 acompañamientos; 143 entrevistas; 91 reuniones con autoridades; 148 libramiento de oficios; 100 acciones de buenos oficios; 15 mediaciones; y, 255 llamadas telefónicas a diferentes autoridades e instituciones.

iv. Resoluciones iniciales

En la fase inicial del mecanismo de protección de derechos humanos, luego de la apertura de los casos, se emite un pronunciamiento, el cual puede consistir en una resolución u otro tipo de

comunicación. En este caso, nos referimos a las resoluciones iniciales que tienen por objetivo ejercer acciones de protección cuando se estime necesario y oportuno.

La resolución inicial contiene las siguientes acciones: solicita informe a las autoridades señaladas sobre los hechos y las medidas adoptadas; solicita informes o cooperación a otras autoridades o instituciones; dicta recomendaciones y medidas adecuadas a las autoridades señaladas para promover la investigación de los hechos; promueve el cese de la presunta violación denunciada, previene daños graves e irreparables para la presunta víctima y activa el cumplimiento de los deberes del Estado; recomienda la reparación integral del daño causado; e informa sobre los hechos a otras autoridades competentes para la adopción de medidas.

En este período, se firmaron 572 resoluciones iniciales y 1,208 oficios resolutivos.⁷ Estos últimos surgieron a partir de la descentralización de firmas de resoluciones, oficios y otras comunicaciones institucionales que se ha implementado con el fin de hacer más eficientes los procedimientos de tutela de derechos humanos. Dicha medida se ha ido aplicando gradualmente a partir de mayo de 2014, según Acuerdo Institucional No. 101, con fecha 30 de abril de 2014, y fue ampliada mediante Acuerdo Institucional No. 212, con fecha 8 de julio de 2015, con la finalidad de dar celeridad a los procedimientos iniciados por esta Procuraduría. Con dicha ampliación, la delegación de firmas también incluye a las jefaturas de los Departamentos de Discapacidad y Derechos Humanos, VIH y Derechos Humanos, Verificación Penitenciaria, y Derechos Políticos, para que suscriban directamente resoluciones, oficios y otras comunicaciones institucionales dirigidas a personas naturales o jurídicas, o a entidades públicas o privadas, en los casos que estén bajo su responsabilidad.⁸

⁷ En cada expediente puede haber más de un oficio resolutivo dependiendo de la cantidad de autoridades que han sido denunciadas, lo cual los diferencia de las resoluciones iniciales en las que se hace mención de todas las autoridades señaladas.

⁸ El Acuerdo Institucional 101 con fecha 30 de abril de 2014 únicamente delegaba al Procurador(a) Adjunto(a) para la Defensa de los Derechos Humanos, a los y las Procuradoras Adjuntas Específicas, a Delegados y Delegadas Departamentales y Locales, a las jefaturas de los Departamentos de Denuncias, Procuración, Resoluciones y Seguimiento.

El análisis estadístico puede realizarse a través de dos variables principales: por derecho humano presuntamente afectado y por institución pública recomendada y notificada. Cada resolución inicial y oficio resolutivo, contiene recomendaciones y supone la aplicación a casos específicos de acciones de protección derivadas del mandato constitucional y legal de la PDDH.

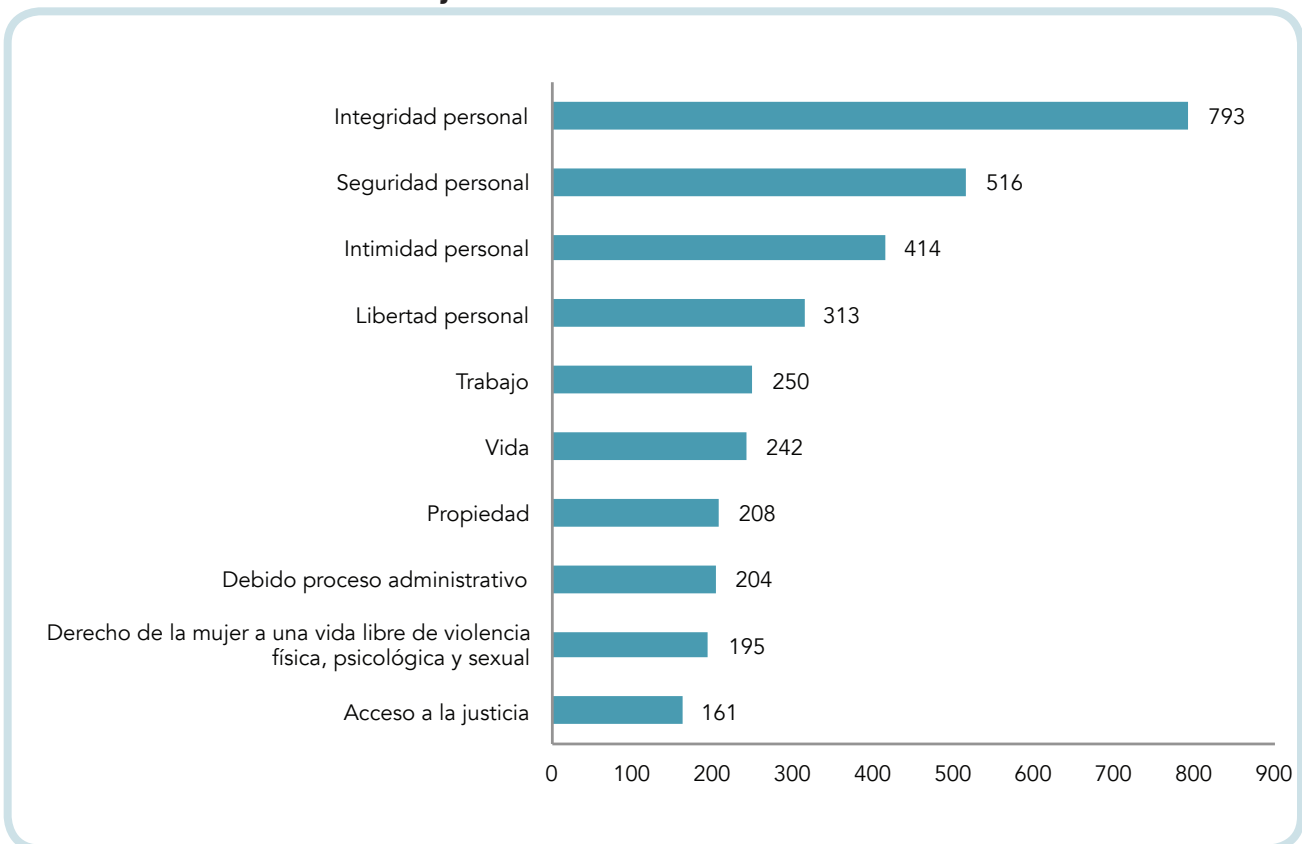
▪ ***Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales***

El derecho a la integridad personal fue el derecho más señalado en resoluciones iniciales y en oficios resolutivos en 793 veces; seguido del derecho a la seguridad personal en 516 ocasiones; luego, el derecho a la intimidad personal 414 veces; libertad personal con 313;

derecho al trabajo 250 ocasiones; derecho a la vida 242 veces; derechos a la propiedad con 208 veces; a un debido proceso administrativo con 204 ocasiones; derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 195; y, derecho de acceso a la justicia con 161 veces.

A continuación se presentan los derechos humanos presuntamente más vulnerados a partir de resoluciones iniciales. Se advierte que la frecuencia de recomendaciones y notificaciones por derecho humano, no corresponde con el total de resoluciones iniciales, debido a que en cada expediente puede existir más de un señalamiento de presuntas violaciones a derechos humanos.

Gráfico N° 5
Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH.

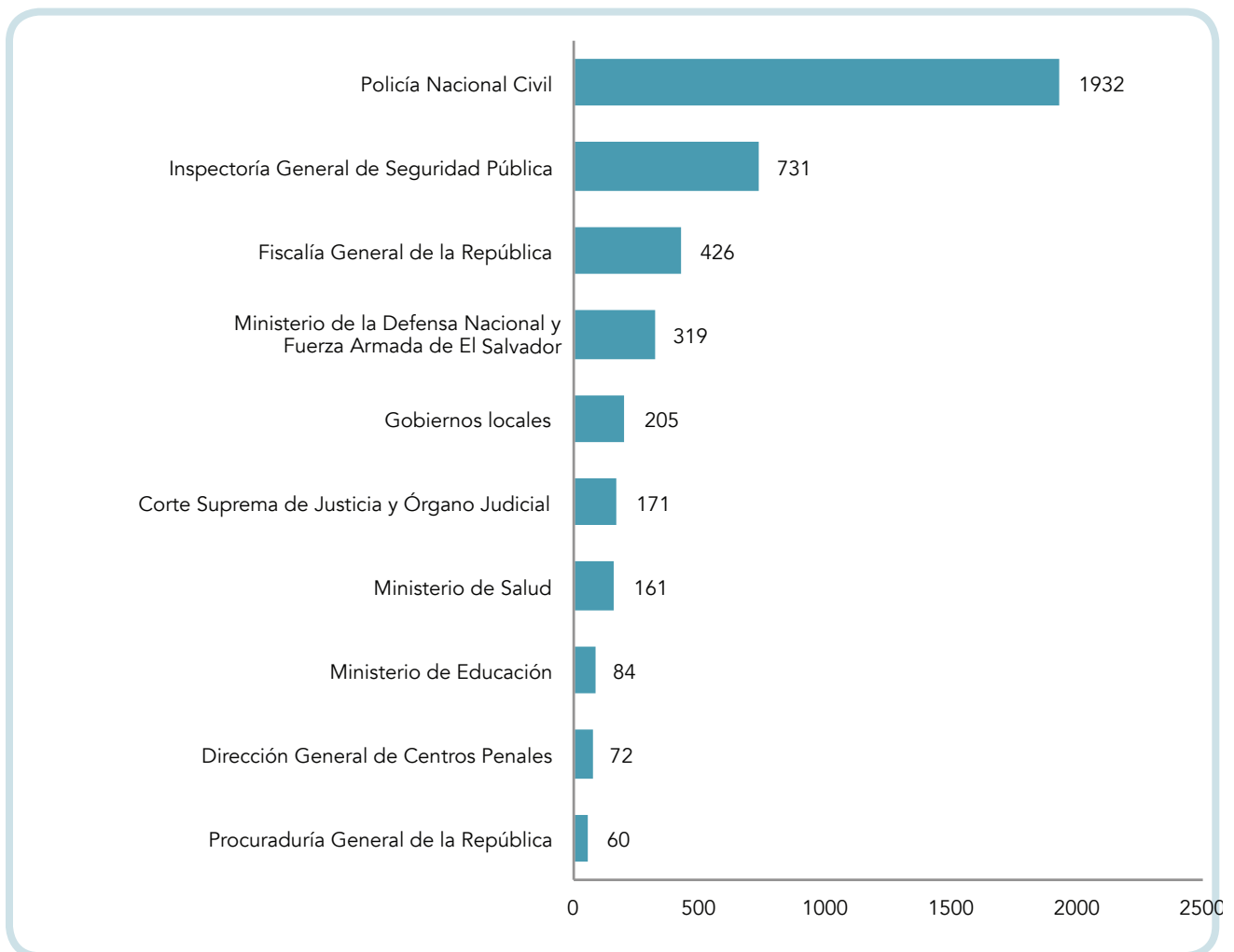
▪ ***Instituciones estatales más señaladas y/o recomendadas en resoluciones iniciales***

En cuanto a las instituciones estatales que han sido señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos, la Policía Nacional Civil se ubicó en el primer lugar con 1,932 ocasiones; luego, la Inspectoría General de Seguridad Pública con 731 veces; seguido por la Fiscalía General de la República con 426; la el Ministerio de la Defensa Nacional y Fuerza Armada de El Salvador con 319 ocasiones; los gobiernos locales con 205 señalamientos; la Corte Suprema de Justicia y Órgano Judicial con 171 veces; el Ministerio de Salud con 161; el Ministerio de Educación en 84 ocasiones; la

Dirección General de Centros Penales con 72 señalamientos; y, la Procuraduría General de la República en 60 veces.

Se advierte que en la siguiente gráfica, la frecuencia de los señalamientos sobre las instituciones públicas que presuntamente han cometido violaciones a los derechos humanos, no corresponde con el total de resoluciones iniciales debido a que en cada expediente puede existir más de un señalamiento a una o varias instituciones. En estos datos también se han tomado en cuenta los oficios resolutivos, de los cuales puede haber varios en un mismo expediente, según la cantidad de autoridades y derechos que hayan sido señalados.

Gráfico N° 6
Instituciones públicas más señaladas y/o recomendadas en resoluciones iniciales
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

v. Resoluciones finales

La resolución final es un pronunciamiento que se emite en la fase de investigación en la que se declara la responsabilidad o no responsabilidad por violación a derechos humanos, ya sea por el incumplimiento del deber de respeto o garantía, la restitución del derecho por la gestión de buenos oficios, el acatamiento o incumplimiento de las recomendaciones iniciales emitidas, la inobservancia a la Ley de la Procuraduría, o el archivo del caso. Lo anterior no limita las posibilidades declarativas y resolutorias, ni impide activar las demás facultades constitucionales y legales de esta Institución para una efectiva protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Durante el período analizado, la cantidad de resoluciones finales firmadas y notificadas a las autoridades señaladas, víctimas y denunciantes asciende a 2,346. De estas, el 59 % fueron resoluciones de archivo; 18 % de resoluciones de no responsabilidad; 12 % resoluciones de responsabilidad; 6 % resoluciones de buenos oficios; 3 % resoluciones de acatamiento de recomendaciones; 2 % de restitución de derechos. Es de aclarar que en una resolución final se pueden realizar diferentes tipos de diligencias de investigación.

A continuación, se presentan las actividades de investigación realizadas por el Departamento de Procuración en San Salvador durante el período analizado, por tipo de diligencias de investigación y derechos específicos.

Cuadro N° 11
Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación in situ	Otros	Total
Derechos políticos								3		3
Derechos civiles	171	23	12	1	63	5	11	22	36	344
Derechos económicos, sociales y culturales	104	17	2	2	38	6	2	10	6	187
Derechos de la niñez y adolescencia	9	2	1	1	3			5		21
Derechos humanos de la mujer	1							5	1	7
Derechos a la protección del medio ambiente										
Derechos de las personas privadas de libertad	5				3			3	1	12

Cuadro N° 11
Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación in situ	Otros	Total
Derechos de las personas con VIH										
Derechos de las personas con discapacidad	1	1	1					1	1	5
Derechos de las personas adultas mayores	1									1
Derechos de la Comunidad LGBTI	1									1
Otros (especificar)										
Denunciante	1									
Derechos defensoras/es de derechos humanos	4							1		6
Personas desplazadas por violencia en razón de violencia social										
Totales	298	43	16	4	107	11	13	50	45	587

Fuente: Reporte Departamento de Procuración, PDDH.

En el cuadro anterior, se observa que de las 587 diligencias de investigación a instituciones estatales señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos, los derechos civiles aglutinan el mayor número de diligencias con 344; seguido de los derechos económicos, sociales y culturales con 187; los derechos de la niñez y adolescencia con 21; y los derechos de las personas privadas de libertad con 12.

Asimismo, las entrevistas ocupan el primer lugar en las acciones de investigación con 298, seguido del libramiento de oficios con 107, las verificaciones in situ con 50, el estudio de expedientes administrativos con 43, el estudio de expedientes judiciales con 16, entre otros.

A continuación, el detalle de verificaciones realizadas a instituciones públicas en este período.

Cuadro N° 12
Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Nombre de la Institución/ Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación in situ	Otros	Total
PNC	44	3	1	1	20			21	11	101
CSJ	6	2	1					1		10
FGR	53	20	4		34			4	11	126
ISNA	6			1	1					8
CONNA	2	1			1			1		5
Órgano Judicial	11	1	10		6		9	1	2	40
PGR	2	1			1				1	5
CONAMYPE	5				1				1	7
MINED	1	1			2			2		6
ISSS	3	2			8	2		1		16
Ministerio de Justicia	5		1		3			1	1	11
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada	22	6			5			3		36
Alcaldías	3				1	1		2		7
Hospitales nacionales	20	1			2					23
IGSP	9	2			1			3	4	19
ANSP	1									1
MINEC	1									1
IML	5	1								6
UTE	2									2
CEPA	5									5
VMT	6	1			1					8
MINSAL	7				3			1		11
FONAT	2									2
MOP		1								1
JVPM	2									2
DGME					1					1

Cuadro N° 12										
Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador										
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017										
Nombre de la Institución/ Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación in situ	Otros	Total
MTPS	1	1								2
UES	2				4					6
FSV								1		1
ISTA		1						2		3
ISRI	1							1		2
SECULTURA	1	2			2			1	2	8
CNR	1									1
Casa Presidencial	1									1
IAIP									4	4
CSSP	1									1
ANDA	1				1					2
Asamblea Legislativa	2									2
Autoridad Marítima Portuaria	1				2					3
Totales	235	47	17	2	100	3	9	46	37	496

Fuente: Reporte de verificaciones a instituciones públicas, Departamento de Procuración, PDDH

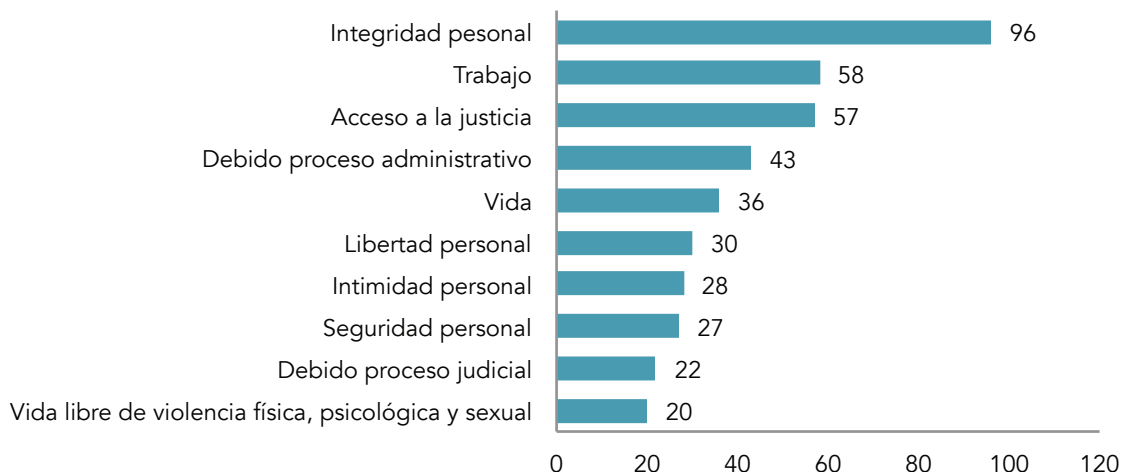
El cuadro anterior refleja que la entidad estatal más investigada es la Fiscalía General de la República con 126; seguida por la Policía Nacional Civil con 101 diligencias; los Juzgados con 40; el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 36; los hospitales nacionales con 23; la Inspectoría General de Seguridad Pública con 19; el Ministerio de Justicia con 16, entre otras.

▪ ***Derechos humanos más violentados según registros en resoluciones finales***

El resultado de las investigaciones y el consolidado de declaraciones de responsabilidad pública por violaciones a los derechos humanos

en las resoluciones finales, ubicaron al derecho a la integridad personal como el derecho más violentado con 96 declaraciones de responsabilidad, seguido del derecho al trabajo con 58 declaraciones; luego de acceso a la justicia con 57; el derecho a un debido proceso administrativo con 43; derecho a la vida con 36; el derecho a la libertad personal con 30; la intimidad personal con 28; seguridad personal con 27; derecho a un debido proceso judicial con 22; y, derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 20. Además, se declaró la responsabilidad 52 veces por incumplimiento a la Ley de la PDDH.

Gráfico N° 7
Derechos humanos más violentados en resoluciones finales
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

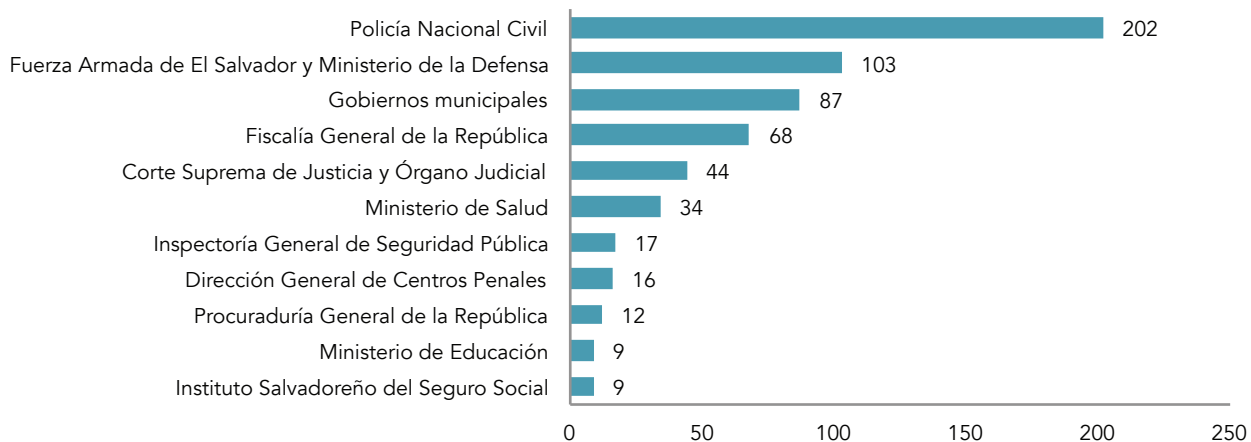


Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

▪ ***Instituciones públicas mayormente señaladas con responsabilidad en resoluciones finales***

En el período comprendido para el presente informe, la Policía Nacional Civil se posicionó como la primera instancia que fue mayormente señalada con responsabilidad en resoluciones finales en 202 ocasiones; seguida por la Fuerza Armada de El Salvador y Ministerio de la Defensa Nacional en 103 veces; siguen los gobiernos municipales con 87; la Fiscalía General de la República con 68 veces; la Corte Suprema de Justicia y Órgano Judicial en 44 veces; el Ministerio de Salud con 34 señalamientos; la Inspectoría General de Seguridad Pública con 17; la Dirección General de Centros Penales en 16 veces; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Educación en 9 ocasiones cada uno, entre otras.

Gráfico N° 8
Instituciones más señaladas como responsables en resoluciones finales
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

▪ ***Función revisora de proyectos de resolución***

La función revisora se define como un mecanismo de control de calidad que tiene como objetivo verificar que los proyectos se encuentren redactados formal y sustancialmente aptos para la firma de la titularidad o de quien esté facultado para ello según las Directrices y Criterios para la Firma de Resoluciones, Oficios y Otras Comunicaciones Institucionales, emitido el 8 de julio de 2015. De acuerdo a la reglamentación interna, los proyectos pueden ser revisados o corregidos de conformidad con las directrices emanadas del titular o las Procuradurías Adjuntas, por el Departamento de Resoluciones o persona delegada para tal efecto.

En el caso de los proyectos de resolución, la señora Procuradora ha delegado al Departamento de Resoluciones la revisión de los proyectos elaborados por las diferentes dependencias operativas del Sistema de Protección de Derechos Humanos. En el período que comprende este informe, dicho Departamento recibió y elaboró en total 355 proyectos de resolución, de los cuales 347 fueron enviados a firma de la señora Procuradora o fueron firmados por la jefatura del Departamento de Resoluciones, por delegación de la titular. Este último dato, se desglosa de la siguiente manera: 25 resoluciones finales enviadas a firma de la señora Procuradora; y, 322 firmadas por la jefatura del Departamento de Resoluciones, entre las que se encuentran resoluciones de archivo, buenos oficios, revisión, restitución y rectificaciones.

vi. ***Seguimiento a las recomendaciones emitidas en resoluciones finales e informes especiales***

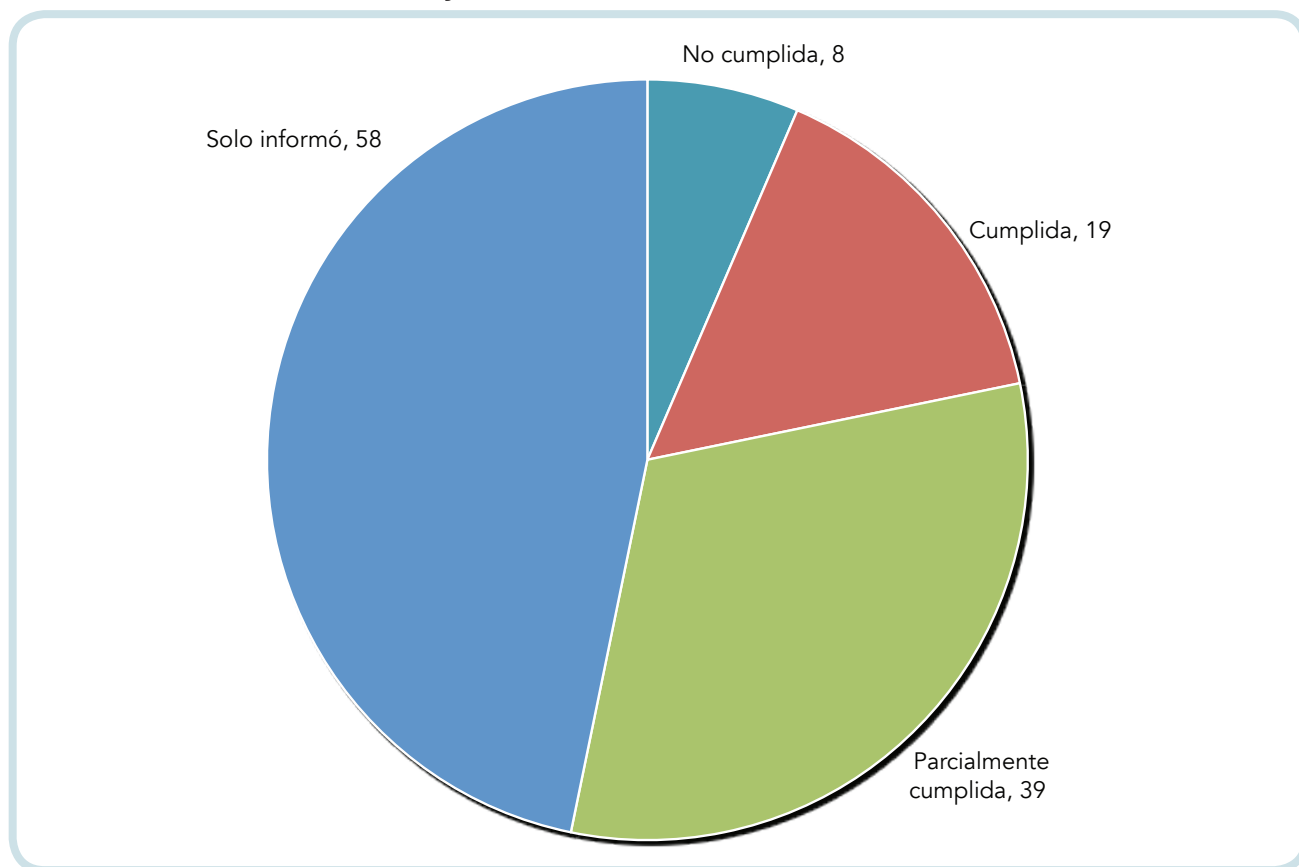
En la fase de seguimiento se verifica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en resoluciones finales, posicionamientos públicos, informes especiales y situacionales u otro tipo de pronunciamiento. Excepcionalmente, el seguimiento incluye las recomendaciones emitidas en resoluciones iniciales, en caso se haya comprobado en esta etapa la violación a derechos humanos.

En la labor de verificación participan el Departamento de Seguimiento en San Salvador y las Delegaciones Departamentales en su comprensión territorial, quienes realizan las siguientes acciones: solicitar informes; entrevistar denunciantes, víctimas, funcionarias y funcionarios o agentes del Estado; verificar procesos judiciales o administrativos; realizar inspecciones; y todas aquellas que se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

El resultado de estas acciones se traduce en el grado de cumplimiento de las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría, desglosadas en cuatro categorías, a saber: cumplimiento, no cumplimiento, parcialmente cumplida y emisión de informes.

Así, en el período que comprende este Informe, se constataron 58 casos en los que solamente se informó de lo actuado; seguido por 39 casos de cumplimiento parcial; 19 casos de cumplimiento; y el no cumplimiento de ocho. En el siguiente gráfico se presenta la proporción de los distintos grados de acatamiento:

Gráfico N° 9
Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales PDDH
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

En su mayoría, las instituciones estatales dan cumplimiento a las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría. Sin embargo, se observa que hay una frecuencia importante respecto a las recomendaciones de las cuales solo informan; es decir, hay una cierta propensión de las autoridades señaladas de no adoptar todas las medidas necesarias para acatar las recomendaciones.

vii. Medidas cautelares

La facultad de emitir medidas cautelares se encuentra regulada en el artículo 36 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Dichas medidas se aplican en casos o situaciones de extrema gravedad o urgencia, con la finalidad de evitar que se consuman daños irreparables a la dignidad de las personas. En la doctrina institucional, también son denominadas como “garantías cuasi

jurisdiccionales de carácter preventivo”, que no prejuzgan la investigación y la declaración de responsabilidad en la resolución final.⁹

Para este período, se emitieron resoluciones con medidas cautelares dirigidas a diferentes autoridades públicas que evitaron la consumación de daños irreparables en casos o situaciones relacionados con diversos derechos. A continuación, se presentan breves comentarios sobre dichas resoluciones emitidas.

Medidas cautelares emitidas para la protección de los derechos de las defensoras y defensores de los derechos humanos a la libertad de pensamiento y expresión, y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia por maltrato psicológico o moral, por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Expediente SS-0248-2016.

⁹ Resolución de medidas cautelares, Expediente CA-0025-2011.

Se atendió denuncia contra el presidente de la ANEP quien, según la denunciante, se ha dado a la tarea de desprestigiar la lucha social que ha realizado durante año como defensora de derechos humanos en el país. Según la denuncia, a dicha defensora se le cuestiona su trabajo y genera opinión en su contra, lo cual se evidencia en publicaciones hechas en diversos periódicos nacionales. La denunciante agregó que tales señalamientos ponen en riesgo su vida y seguridad, por lo que se emitieron las siguientes medidas cautelares:

- Al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública y al Director General de la Policía Nacional Civil, que promuevan las acciones necesarias en orden a proteger y dar seguridad a la denunciante y a su grupo familiar en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones.
- Al Fiscal General de la República, que adopte las acciones necesarias y de carácter urgente para resguardar y garantizar los derechos a la seguridad personal y a la vida de la denunciante, así como de su grupo familiar. Asimismo, que investigue las amenazas y acciones de seguimiento de las que podría ser víctima la citada profesional y, con base a ello, ejerza la acción penal correspondiente.

Medidas cautelares emitidas por las supuestas violaciones a los derechos a la armonía laboral, en particular por la existencia de prácticas que preliminarmente se califican como constitutivas de acoso laboral y a la estabilidad laboral, contra autoridades del Ministerio de Economía. Expediente SS-0188-2016.

Se investigó el caso de una persona que labora en el Ministerio de Economía desde enero de 2011, y quien comenzó a sufrir actos de acoso y hostigamiento laboral el año 2015 por parte de un asesor del Ministro de Economía, llegando a solicitarle la renuncia al cargo, ante lo cual la denunciante pidió que dicha solicitud se la hicieran llegar por escrito, pero ello no ocurrió. A partir de entonces se ha enfrentado a diversas situaciones, entre las que se encuentran que ha pasado meses sin

que se le asigne trabajo, explicándosele que era por no ser de confianza del señor Ministro; sin embargo, dada la experiencia que tiene en el área, poco a poco le fueron asignando casos que resolver. Agregó que actualmente está asignada al despacho ministerial bajo las órdenes del asesor del despacho, y que no se le han asignado funciones ni carga de trabajo bajo esa coordinación, actos que constituyen formas de acoso y afectaciones a la estabilidad laboral. Por lo que se consideró necesario emitir las siguientes medidas cautelares:

- Al asesor del señor Ministro de Economía, se abstenga de realizar actos de hostigamiento y acoso laboral en contra de la denunciante. A la vez se le insta a asignarle la carga de trabajo correspondiente en las condiciones dignas y equitativas que sean necesarias para el buen desempeño de la misma, debiendo además ser agente generador de un clima laboral armonioso en el área de trabajo en el que se desempeña la denunciante.
- Al señor Ministro de Economía, que gire las instrucciones pertinentes a fin de evitar las prácticas discriminatorias y de acoso laboral en contra de la denunciante al no asignarle funciones ni carga de trabajo, debiendo en forma inmediata proveerle de las herramientas y asignaciones de trabajo necesarias para su debida ejecución.
- Al mismo funcionario se le recomienda adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la realización de cualquier práctica, que aislada o en contexto con otras más, refleja una acción constitutiva de acoso laboral en perjuicio de la denunciante.

Medidas cautelares emitidas para evitar que continúe habiendo agravios y perjuicio económico, moral y familiar. Expediente SS-0316-2015.

Se tuvo conocimiento que la denunciante labora como docente de primero y segundo ciclo del Complejo Educativo Santa Eduvigis, en Soyapango, desde enero de dos mil siete, siendo parte del Consejo Directivo Escolar (CDE).

En el año dos mil catorce asumió la Dirección una persona nueva, quien reestructuró y cambió la planilla docente, causándole agravios al reasignarle asignaturas y grado diferente. En enero de dos mil quince, la denunciante fue elegida como Subdirectora por el Consejo de Profesores; sin embargo, el Director le restó autoridad frente a los docentes, estudiantes y padres de familia. Señaló también que ha sido sujeta a pagos de salario atrasados y a maltrato verbal y psicológico con expresiones ofensivas por parte del Director, quien la ha denigrado frente a sus compañeros de trabajo y alumnos en general, no le asignaba carga académica.

En octubre de dos mil quince la Coordinadora de Desarrollo Humano de la Departamental de Educación buscó notificarle la resolución en la que se establecía que sería destacada temporalmente en el Centro Escolar República Dominicana, dándole plazo de setenta y dos horas para que presentara acta de toma de posesión, caso contrario no se responsabilizaría el Ministerio de Educación de su situación y salario; traslado que le cusa agravio por desmejora en su condición como educadora, en su economía y vida familiar, argumentando violación al derecho de la garantía del debido proceso por hacerlo obligatorio y no de forma voluntaria.

Por lo anterior, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, dictó las siguientes medidas cautelares:

- Al Director del Complejo Educativo Santa Eduvigis abstenerse de cometer actos que puedan constituir expresiones de violencia o acciones intimidatorias en contra de la denunciante y demás personal docente, en el ejercicio de sus labores del Complejo Educativo que representa.
- Al Director de la Oficina Departamental de Educación de San Salvador revisar exhaustivamente el procedimiento administrativo que ha determinado la subutilización de la plaza que ostenta la denunciante en el Complejo Educativo Santa Eduvigis, a fin de determinar si la

situación es real y que no sea producto de las diferencias personales entre el director y la docente, a fin de no causar perjuicio a la misma y a la comunidad estudiantil. En tal sentido, se le recomienda dejar sin efecto la decisión de traslado de la profesora.

- Al Ministro de Educación girar instrucciones de manera urgente a quien corresponda a fin de investigar las acciones realizadas por el director del Complejo Educativo Santa Eduvigis y abordar la problemática del citado centro escolar, a la vez de buscar soluciones inmediatas a la misma con el ánimo de ofrecer un clima armonioso de trabajo en aras del bienestar de la población estudiantil.
- A la Junta de la Carrera Docente, Sector Uno de San Salvador, revisar las demandas interpuestas por la denunciante en contra del director del Complejo Educativo Santa Eduvigis, darle celeridad a las mismas y emitir los pronunciamientos respectivos.

Medidas cautelares emitidas para la protección del derecho humano a la libertad personal y a la seguridad personal del joven Daniel Alberto Avilés Alemán. Expedientes SS-0082-2017.

Esta Institución inició investigación de oficio en enero de dos mil diecisiete a partir de información publicada por el periódico La Prensa Gráfica; a dicha investigación se agregó denuncia interpuesta posteriormente sobre los mismos hechos: que en enero del mismo año en la cancha de fútbol de la residencial Alta Vista en Tonacatepeque, el joven Daniel Alberto Avilés Alemán fue detenido por agentes policiales y subido a una patrulla sin comunicarle los motivos del procedimiento. Según la información, los agentes consignaron fraudulentamente en el acta de detención que el joven había sido aprehendido en otro lugar por el delito de "posesión y tenencia de drogas con fines de comercio", cuando en realidad el hecho ocurrió frente a varias personas en un costado de la mencionada cancha al interior de las instalaciones de un polideportivo.

Ante dicha situación, esta Procuraduría dictó las siguientes medidas cautelares:

- Al Juez de Instrucción de Ilopango que, ejerciendo el control que le corresponde sobre la actuación fiscal y policial en el caso, con base en la información disponible y a los principios constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionados con esta resolución referidos a la legalidad de la detención del joven en cuestión, resuelva de manera pronta y oportuna lo que a derecho corresponda.
- Al Fiscal General de la República, que de manera urgente amplíe la investigación de manera imparcial, exhaustiva y efectiva sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta los elementos aportados por esta Procuraduría.

Medidas cautelares emitidas para la protección de los derechos humanos a la seguridad personal, a la libertad personal, y al honor y reputación, en perjuicio de Miguel Ángel Deras Martínez. Expediente SS-0203-2016.

Se inició investigación por nota publicada en el periódico digital El Faro sobre la actuación de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República de acusar a Miguel Ángel Deras Martínez de ser uno de los que participaron en la denominada “Masacre de Opico” ocurrida en mayo de dos mil dieciséis, con base en el testimonio de uno de los involucrados. En julio de ese mismo año, en Audiencia Especial para la revisión de la medida de detención provisional, el agente auxiliar del Fiscal General de la República informó que en las diligencias de reconocimiento de personas el testigo clave no reconoció al joven Deras Martínez como uno de los participantes del hecho, por lo que la jueza que lleva el proceso ordenó sobreseimiento provisional y decretó el cese de la medida cautelar de la detención provisional. Sin embargo, en septiembre la familia del joven Deras Martínez y él mismo informaron a esta Procuraduría que cuando regresaba a

su domicilio fue interceptado por una patrulla policial, cuyos agentes les ordenaron que se tiraran al suelo boca abajo. Al llegar a la Delegación Policial de Quezaltepeque fue interrogado por el mismo detective que lo interrogó la vez que fue detenido en mayo quien, al verlo, le asestó una patada mientras le decía “sos pandillero y dijiste que no” y lo insultaba.

En el ejercicio de las potestades constitucionales y legales, esta Procuraduría emitió las siguientes medidas cautelares:

- Al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, que adopte las medidas necesarias y de carácter urgente a fin de detener las acciones de acoso, persecución y agresión por parte de agentes policiales e investigadores de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Quezaltepeque contra el joven Miguel Ángel Deras Martínez y su grupo familiar; asimismo, instruya la investigación a que hubiere lugar.
- Al Fiscal General de la República, que inicie la investigación que corresponda a fin de deducir responsabilidades en los hechos relatados.

Medidas cautelares emitidas por la posible vulneración al derecho a la vida y la salud de las pacientes Lady Xiomara Conde Jacobo y Wendy Vanessa Maldonado Martínez al no proveerles el medicamento denominado Trastuzumab 450mg. Frasco Vial, para restablecer su salud, ante el incumplimiento del Convenio y la búsqueda de otras opciones por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Expediente SS-0366-2016.

Mediante denuncia interpuesta, esta Procuraduría tuvo conocimiento que Lady Xiomara Conde Jacobo y Wendy Vanessa Maldonado Martínez fueron diagnosticadas con cáncer por médicos del Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, prescribiéndoles para su tratamiento el medicamento Trastuzumab 450 mg. Frasco

Vial, habiendo sido informadas por el Ministerio de Salud que el medicamento no se encuentra incluido en el listado oficial de medicamentos, por lo que debían solicitarlo vía el mecanismo de convenio existente entre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el caso de la paciente Conde Jacobo, con anterioridad se le habían entregado doce frascos a través de dicho convenio, pero según nueva indicación médica, necesitaba nueve frascos más, pero al solicitarlos a través del convenio, el Director General del ISSS le respondió que "...en esta ocasión no será posible atender lo solicitado, debido a que por el momento nuestras existencias son mínimas". En el caso de la paciente Maldonado Martínez, indicaron que se le prescribieron dieciocho frascos, los cuales solicitó vía convenio entre el MINSAL e ISSS, y ella había comprado por sus medios trece frascos, solicitando ayuda para obtener los cinco frascos restantes los cuales no podía comprar por su difícil situación económica.

Por lo anterior, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 194, romano I, ordinales 1°, 2°, 7° y 11°, y 36 de la Ley que rige a esta Institución, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió dictar las siguientes medidas cautelares:

- A la señora Ministra de Salud, que adopte las medidas pertinentes en el marco de los principios de autonomía, accesibilidad, gratuidad, transparencia y confidencialidad para garantizar el acceso a los medios adecuados y efectivos para tratar la enfermedad de cáncer; esto es, para los casos que nos ocupan, el brindar el medicamento denominado Trastuzumab 450 mg Frasco Vial a la brevedad posible, y al no estar disponible para la continuidad del tratamiento, su interrupción puede incidir de manera negativa en la salud. Asimismo, se agilicen las acciones encaminadas a incorporar el medicamento Trastuzumab 450 mg Frasco Vial en el listado institucional de medicamentos para garantizar su disponibilidad.

- Al señor director del ISSS que adopte las medidas en el marco de los principios de autonomía, accesibilidad, gratuidad, transparencia, confidencialidad y, sobre todo, de no discriminación para brindar medicamento a las pacientes a la brevedad posible, de conformidad a las solicitudes que le hayan sido presentadas, sin que ello acarree un menoscabo en la atención de salud de los derechohabientes de otros rubros.

b) Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad

Toda persona detenida, sin distinción de edad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención en las que se respeten sus derechos, y es el Estado quien debe garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de su dignidad humana. Es así como la PDDH se encarga de vigilar la situación de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, ya que le corresponde ser notificada de todo arresto y a cuidar que sean respetados los límites legales de la detención administrativa, de acuerdo a los artículos 194, romano I, ordinal 5° y 6° de la Constitución de la República; 11 ordinal 5° y 12 ordinal 3° y del 40 al 44 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La PDDH tiene la potestad para ingresar, sin previo aviso, al centro penitenciario, cárcel o cualquier lugar público donde se presuma que se encuentra una persona privada de su libertad, a fin de garantizar el respeto de sus derechos; además, le faculta para entrevistar a personas detenidas, sin interferencias y en forma privada.

Asimismo, se mantiene vigilante de la situación de las personas privadas de libertad como un mecanismo del Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Este mecanismo que se concretiza en llevar un monitorio periódico y realizar verificaciones, tiene por finalidad supervisar y vigilar las condiciones en las que

se encuentran las personas privadas de libertad, así como realizar acciones dirigidas a corroborar, en un caso o situación particular, la existencia o no de violaciones a los derechos humanos de las mismas.

En el período que comprende el presente Informe, la Procuraduría ha realizado monitoreo y verificaciones permanentes en los diferentes centros penales, bartolinas policiales, centros

hospitalarios, instalaciones militares, centros de reeducación para menores, resguardos u otros lugares en los que se encuentran personas privadas de libertad o sometidas a medidas de colocación institucional, juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, consejos criminológicos, oficinas de traslado de reos y de todas aquellas instancias relacionadas con el sistema penitenciario en todo el territorio nacional. Teniendo como resultado lo siguiente:

Cuadro N° 13
Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Delegaciones	Centros penitenciarios	Centros de Inserción Social para adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal	Centros de Resguardo y detención Administrativa y Bartolinas	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Pabellones de reos en hospitales	Otras Instituciones Públicas Visitadas	Total
San Salvador (*)	81	8	73	4	17	30	213
San Miguel	24			11	8	1	44
Chalatenango	39		32	9	2	2	84
Usulután	31		70	3		2	106
Cabañas	35	35	97	6	11	16	200
La Paz	13		62				75
Cuscatlán	3	1	39	34			77
La Unión	18		43	2	6		69
San Vicente	9		16	2			27
Santa Ana	24	17	65	9	10	14	139
Morazán	15		25				40
Ahuachapán		10	35		4	3	52
La Libertad	12		47	1		3	63
Sonsonate	41	4	52	3			100
Totales	345	75	656	84	58	71	1,289

Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores*

El anterior cuadro refleja que durante este período se realizaron un total de 1,289 verificaciones a las diferentes instituciones responsables de las personas privadas de libertad. La mayor parte de verificaciones llevadas a cabo a nivel nacional fueron en los Centros de Resguardo y Detención Administrativa y Bartolinas con 656; seguido por los Centros Penitenciarios con 345 visitas; le siguen los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena con 84; los Centros de Inserción Social para adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal con 75; otras instituciones públicas con 71; y los pabellones de reos en hospitales con 58. El número de verificaciones por recintos penitenciarios se presentan a continuación.

i. Centros Penitenciarios

La Constitución de la República de El Salvador señala que el Estado organizará los centros

penitenciarios con el objeto de corregir las conductas delictivas de las personas ahí internadas, así como educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación social y la prevención de los delitos. La finalidad es brindar a la persona condenada, por medio de la ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad.

En este contexto, esta Procuraduría se mantiene constantemente vigilando las acciones públicas en los diversos recintos penitenciarios a nivel nacional. El sistema penitenciario cuenta con 21 Centros y 4 Pabellones de reos en hospitales, clasificados según su función establecida en el artículo 68 de la Ley Penitenciaria. En el siguiente cuadro se detalla la frecuencia de las verificaciones realizadas:

Cuadro N° 14 Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios		
Tipo	Nombre	Frecuencia
Centros Preventivos	La Unión	0
	Sonsonate	0
	Jucuapa	0
	Cojutepeque	1
	Ilobasco*	0
Centros de cumplimiento de penas	Usulután	0
	Sensuntepeque	0
	Santa Ana	0
Centros Mixtos	Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango)	11
	Apanteos (Santa Ana)	1
	Centro Penitenciario "La Esperanza" (San Salvador)	26
	San Vicente	1
	Chalatenango	2
	Quezaltepeque (La Libertad)	20
	Metapán	1
	San Miguel	0
	Ciudad Barrios (San Miguel)	6
	Izalco (Sonsonate)	8

Cuadro N° 14
Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios

Tipo	Nombre	Frecuencia
Centros de Seguridad	Zacatecoluca (La Paz)	2
	San Francisco Gotera (Morazán)	1
Centros Abiertos	Centro de Fase Semi Libertad del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango	0
	Centro Penitenciario "La Esperanza"	0
Pabellones de reos en hospitales	Hospital Nacional Rosales (San Salvador)	8
	Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango - San Salvador	8
	Hospital Nacional San Bartolo	0
Total		96

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores.

*El Centro Preventivo de Ilobasco fue inaugurado el 15 de abril de 2015.

El cuadro anterior muestra que los centros mixtos acumulan la mayor cantidad de verificaciones, seguido por los pabellones de reos en hospitales y luego los Centros Preventivos y los Centros de Seguridad. Específicamente el Centro Penitenciario "La Esperanza" de San Salvador recibió 26 verificaciones que contabiliza la mayor cantidad de diligencias, luego en el Centro Penal de Quezaltepeque se realizaron veinte visitas; le sigue el Centro de Readaptación para Mujeres en Ilopango con once, y el Centro Penal de Izalco con ocho.

Asimismo, del constante monitoreo del sistema penitenciario puede advertirse la persistencia de una situación precaria en los derechos de las personas privadas de libertad; la cual se ha visto afectada en razón de las medidas públicas para combatir la criminalidad, especialmente en relación a la capacidad carcelaria para albergar a más personas. Al respecto, la Procuraduría ha conocido que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) cuenta con la disponibilidad de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura

del sistema penitenciario, ampliando centros penales existentes y construyendo centros temporales de detención que permitan aplicar un mejor tratamiento, haciendo efectiva la clasificación de los internos y así conocer qué fortalezas necesitan de manera individual.

Debe hacerse notar que desde la entrada en vigencia el Decreto Legislativo que contiene las Medidas Extraordinarias de Seguridad, la labor de atención a familiares de personas privadas de libertad por parte del Departamento de Verificación Penitenciaria se ha triplicado, superando en algunos meses las doscientas cincuenta personas; llegando incluso en enero de 2017 a atender a trescientas cincuenta.

A continuación se ilustran las diferentes peticiones que realizan las personas usuarias ante este departamento con el objeto de que se realicen las gestiones pertinentes y asegurar mejores condiciones para las personas privadas de libertad:

Cuadro N° 15 Tipo y cantidad de gestiones realizadas en Centros Penales a requerimiento de familiares	
Requerimientos realizados por familiares	Cantidades
Solicitud de asistencia médica	675
Ingreso de medicamentos por desabastecimiento en clínicas institucionales	11
Solicitud de verificación de condiciones de habitabilidad en las que se encuentran los internos	458
Información del plazo de las medidas adoptadas	35
Información del rol que está ejerciendo la PDDH con respecto a medidas adoptadas	15
Solicitudes de permisos para la visita familiar, ingreso de paquetes de artículos de uso personal	97
Garantizar la alimentación	20
Solicitudes de situación jurídica, evaluaciones técnicas para gestionar beneficios penitenciarios y judiciales	70
Solicitudes de traslados de los privados de libertad a otros centros penales	297
Informando suspensión de audiencias y requiriendo su pronta reprogramación	35
Verificar e informar sobre fallecimiento de privados de libertad en los centros penales de San Francisco Gotera, Izalco y Quezaltepeque	45
Internos que cuentan con su respectiva carta de libertad, pero no se ha hecho efectiva	35
Problemas con el depósito de dinero, no aparecen en el sistema, extravío de documentos entregados y finalización de la situación del acceso a las tiendas institucionales	161
Solicitud de los requisitos para poder realizar los depósitos de dinero	75
Solicitud de informar sobre los motivos del aislamiento de privados de libertad por desórdenes en los sectores (por seguridad, traslado o a petición del privado de libertad)	21
Total de gestiones realizadas	2,050

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores.

ii. Centros de Inserción Social

El Art. 3 de la Ley Penal Juvenil prescribe los principios orientadores de la justicia juvenil, y los detalla de la siguiente manera: la protección integral de la niñez y adolescencia, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. En ese contexto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de estas niñas, niños y adolescentes privados y privadas de libertad en los diferentes centros de internamiento, por lo que toda persona detenida, sin distinción de edad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad.

Por lo anterior, la Procuraduría realiza monitoreo con el afán de verificar la situación en la que se encuentran los internos y las internas. En el período reportado, se realizaron un total de 8 verificaciones a los Centros de Inserción Social. A continuación, se presenta el detalle de estas dependencias y la frecuencia de las visitas:

Cuadro N°16 Verificaciones realizadas en Centros de Inserción Social para adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017		
Tipo	Nombre	Frecuencia
Centros de Inserción Social	Centro de Inserción Social "Sendero de Libertad" de Ilobasco (Ilobasco - Cabañas)	01
	Centro de Inserción Social de Tonacatepeque (Apopa)	03
	Centro de Inserción Social "El Espino" de Ahuachapán	01
	Centro de Inserción Social Femenino de Ilopango (Soyapango - San Salvador)	02
	Centro Intermedio de Tonacatepeque	01
Total		08

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores

iii. Centros de resguardo de detención administrativa y bartolinas

A través del monitoreo constante que mantiene esta Procuraduría en las bartolinas policiales, se ha constatado que el problema de hacinamiento en que se encuentran los centros penales ha tenido efecto directo en las condiciones de miles de personas detenidas. Las bartolinas han pasado de ser lugares en que la detención era de corta duración (detención administrativa y el término de inquirir), convirtiéndose en cárceles en donde se alojan a personas que están siendo investigadas procesalmente, e incluso hay personas ya condenadas.

Otra situación preocupante es que las bartolinas policiales no cuentan con las condiciones necesarias para asegurar que los internos e internas estén separados por sexo, edad, gravedad del delito, etc. En la práctica, las personas están confinadas en celdas separadas por barrotes o delgadas divisiones de lámina o ladrillos, lo cual hace frágil la seguridad de las y los detenidos.

c) Atención a grupos en condición de vulnerabilidad

Es un mecanismo de protección de derechos humanos regulado en el Reglamento de Aplicación de Procedimientos y que considera como personas en situación de vulnerabilidad a aquellas personas que individual o colectivamente se encuentran en desventaja en el goce de cualquiera de sus derechos humanos en razón de las condiciones sociales, políticas o económicas.

En los últimos años, en la Procuraduría se han creado varios departamentos y unidades especializadas que brindan apoyo técnico y colaboración sobre temáticas que tienen que ver con estos sectores poblacionales excluidos del desarrollo. Entre las funciones que han sido encomendadas a estas instancias se encuentran: atender con prontitud las solicitudes para participar en las diferentes fases de la tramitación de expedientes; brindar acompañamiento a las víctimas debiendo

realizar las acciones inmediatas de protección que procedan tales como la gestión de buenos oficios, monitoreo permanente de hechos y situaciones relacionadas con su área de trabajo, monitoreo interno y control centralizado de los expedientes abiertos a nivel nacional sobre las temáticas de sus respectivas áreas. Deberán, además, elaborar reportes periódicos y hacer recomendaciones o propuestas para la mejora de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos.

A continuación se presentan las principales acciones de protección específicas a personas en condición de vulnerabilidad.

i. Derechos de las personas viviendo con VIH

El Departamento de VIH y Derechos Humanos fue creado en octubre de 2010 y es la instancia comprometida en la atención de los derechos de las personas viviendo con VIH. Busca, además, contribuir con el cambio de los paradigmas sociales, disminuir el estigma y la discriminación y apoyar en la prevención de la expansión del virus y las fatales consecuencias que genera la exclusión social de este sector de población en situación de vulnerabilidad.

En el periodo que abarca el presente informe se recibieron tres denuncias relativas a situaciones sistemáticas, tales como discriminación en hospitales de la red nacional y del ISSS, especialmente en lo relativo a la escasez de medicamentos antirretrovirales. Asimismo, se brindaron 17 orientaciones por presuntas violaciones a derechos humanos relativas al VIH en ámbitos que no eran competencia de la Procuraduría, por lo que se remitieron a las instituciones correspondientes.

También, se emitieron cinco opiniones para delegaciones departamentales para la elaboración de resoluciones iniciales y finales relativas a vulneraciones de derechos humanos en función del diagnóstico de VIH. En cuanto a pronunciamientos emitidos, se elaboraron cuatro relativos a la conmemoración del día Nacional de la Solidaridad con las personas

con VIH, otro en el marco de la vigilia mundial de la solidaridad con las personas con VIH, también uno en conjunto con la Mesa de VIH y Derechos Humanos por la conmemoración del 1 de diciembre: Día Mundial de Respuesta ante el VIH, y otro pronunciamiento el 1 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Cero Discriminación. Asimismo, se envió una opinión a la Asamblea Legislativa sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana; asimismo, se envió informe a la CONAVIH sobre la medición de gasto en Sida de la PDDH durante el año 2016 y con se tuvo participación con esta misma instancia en la elaboración de su Informe sobre VIH y trabajo.

Con relación a reuniones con autoridades públicas, se tuvo asistencia a nueve reuniones ordinarias y a dos extraordinarias de la Comisión Nacional contra el Sida (CONASIDA); a cinco reuniones de la Comisión de Transición de CONASIDA a CONAVIH; a tres reuniones ordinarias de la CONAVIH; a seis reuniones de la subcomisión de monitoreo y evaluación de la CONASIDA; a cuatro reuniones de la subcomisión de legislación de la CONASIDA; a doce reuniones de la subcomisión de trabajo y VIH de CONASIDA. Asimismo, se tuvo participación en seis reuniones de trabajo de la Red de Atención Integral y Continua en VIH.

Además, se ha mantenido constante comunicación con líderes y lideresas de grupos de apoyo de la red de hospitales nacionales y del Seguro Social de los catorce departamentos del país; se han sostenido doce reuniones de la Mesa de VIH y Derechos Humanos; se han realizado doce concentraciones en conjunto con la referida Mesa ante la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de la Ley de VIH presentada por la sociedad civil; y se ha tenido participación en la elaboración del pensum del Diplomado de Alfabetización Jurídica en VIH de la Red Centroamericana de Personas con VIH.

En cuanto al trabajo en mesas interinstitucionales, se ha tenido participación en reuniones con la Alianza Estratégica por la Sostenibilidad

ante el VIH, en la Red de Atención Integral y Continua en VIH de San Salvador, con el grupo asesor regional de la Red Centroamericana de Personas con VIH y en la Red Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y VIH.

Por otra parte, y en relación a las verificaciones y mediaciones realizadas, entre el periodo de junio 2016 a abril de 2017, se realizaron doce gestiones ante centros de salud pública y el ISSS para verificar la atención adecuada y oportuna a personas con VIH. Además, se realizaron diez gestiones de casos de personas privadas de libertad con VIH, en coordinación con Centros Penales, para garantizarles el acceso a la atención médica; también, se instaló una mesa de diálogo con representantes de autoridades del Ministerio de Salud y representantes de organizaciones de personas con VIH con relación al traslado de la clínica de atención integral del Hospital de San Miguel, la cual culminó con éxito al lograr que no se trasladara dicha clínica. Adicionalmente, se verificaron las condiciones de los niños y adolescentes que están con medida de acogimiento institucional en el Hogar Adalberto Guirola de Santa Tecla.

Con relación a presencia en eventos nacionales e internacionales, hubo participación y asistencia en la presentación de la propuesta al Fondo Mundial de la Red Centroamericana de Personas con VIH; asimismo, hubo participación en la delegación de El Salvador en la reunión de alto nivel de Naciones Unidas para el SIDA, realizada en Nueva York en junio de 2016. También, se participó en la “Reunión regional de servicios legales relacionados con el VIH: de lo local a lo regional”, la cual se llevó a cabo en Bogotá, Colombia; asimismo, se participó en el Taller de Abogacía Política en Tuberculosis y VIH que se celebró en la Ciudad de México en noviembre de 2016.

Entre otras actividades relevantes se pueden mencionar las gestiones hechas ante el Ministerio de Salud para la conformación del Frente Parlamentario de la Lucha contra la Tuberculosis y “TB Caucus”, que fue lanzada en Brasil el 15 de marzo de 2016; también, se ha presentado

ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa la iniciativa “Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis y VIH “TB Caucus””. También se participó como observador en el comité de selección del Oficial Jurídico de la Red Centroamericana de Personas con VIH; se participó en la elaboración del protocolo de la toma de denuncias a violaciones relacionadas con el VIH de la Red Centroamericana de Personas con VIH; y se participó en la revisión del protocolo para la elaboración del perfil de riesgo de las personas con VIH de la RDCA+. Finalmente, se han sostenido reuniones con autoridades del MINSAL, ONUSIDA y PASCA para la adhesión al Plan Estratégico Nacional Multisectorial de VIH por parte de PDDH.

ii. Derechos de las personas con discapacidad

El Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos inició formalmente sus labores a partir del 28 de septiembre de 2011, y desde entonces le ha correspondido dar seguimiento a las acciones de las instancias públicas que tienen por función garantizar los derechos de las personas con discapacidad. A continuación se mencionan las actividades realizadas por este Departamento:

▪ Asistencia técnica sobre denuncias recibidas en el tema de personas con discapacidad

Durante el periodo comprendido en el presente Informe Anual, el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos brindó un total de 90 asistencias técnicas relativas a posibles afectaciones de derechos humanos de las personas con discapacidad. Concretamente, se han brindado orientaciones a personas con discapacidad, sus familiares o bien a representantes de organizaciones de personas con discapacidad.

Además se han realizado gestiones de buenos oficios, verificaciones y opiniones técnicas a diferentes instituciones. Las cuales se detallan a continuación: Sala Braille – Biblioteca Nacional de El Salvador “Francisco Gavidia”; Instituto

Salvadoreño de Bienestar Magisterial, sede Central y Policlínico Soyapango; Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Comisión Calificadora de Invalidez – Superintendencia del Sistema Financiero; Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral; Unidad de Delitos Relativos a la Vida y la Integridad Física Fiscalía General de la República – Oficina Fiscal de Santa Tecla, Oficina Fiscal de Apopa; Hospital Nacional General y de Psiquiátrica “Dr. José Molina Martínez”; Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad – Universidad de El Salvador; Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado; Radio Nacional de El Salvador; Departamento de Salud Ocupacional y Delegación Zacamil – Policía Nacional Civil; Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad; Fondo Nacional de Vivienda Popular; Centro Nacional de Registros – CNR; Corte Suprema de Justicia; Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; Departamento de Educación Inclusiva – Ministerio de Educación; Instituto Salvadoreño del Seguro Social; Unidad de Defensa de la Familia y el Menor de la Procuraduría General de la República; Hospital de Niños “Benjamín Bloom”; Hogar de Niños “Adalberto Guirola” – ISNA; y Unidad de Salud Zacamil – Ministerio de Salud.

En este mismo rubro, también se han tramitado expedientes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, ya sea brindado opiniones técnicas sobre los mismos a diferentes unidades de la PDDH o la realización de diligencias a requerimiento de estas.

Asimismo, se brindaron opiniones técnicas y asesoría a diferentes unidades institucionales, como: Despacho de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Departamento de Denuncias, Departamento de Recursos Humanos, Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos, Delegaciones Departamentales, Escuela de Derechos Humanos y personal jurídico de turno. También se presentó opinión sobre contenido del Proyecto “Apoyo a la promoción de la Justicia

Especializada para las Mujeres en El Salvador” en relación a mujeres y niñas con discapacidad y opinión sobre propuesta de reformas a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

- **Documentos firmados por la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara (pronunciamientos, informes, opiniones, entre otros)**

Entre los documentos emitidos por este Departamento y que han sido firmados por la señora Procuradora se encuentran los siguientes:

Oficios:

Se elaboraron oficios requiriendo información a diferentes funcionarios y funcionarias sobre casos relativos a posibles afectaciones a los derechos de personas con discapacidad, concretamente a los siguientes: al Rector Interino de la Universidad de El Salvador, licenciado Luis Argueta Antillón; a la Defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador, Msc. Claudia María Melgar de Zambrana; al ex Presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad – CONAIPD, señor Jesús Martínez; a la Procuradora General Adjunta de la Procuraduría General de la República, licenciada Sara del Carmen Guardado Gómez; al Director del Hospital Nacional Psiquiátrico “Doctor José Molina Martínez”, Doctor Melvin Arturo Gómez; al Fiscal Auxiliar de la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía General de la República, licenciado Manuel de Jesús Menjívar Castro; a la Ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara Pérez, Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia – ISNA, licenciada Elba Gladis Tobar Ortiz y al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde.

Además se remitieron oficios firmados por la titular sobre otros aspectos relativos a la promoción de derechos humanos de este colectivo, específicamente a las Presidencias

de Comisiones de la Asamblea Legislativa: de Familia, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Ingeniero Carlos Armando Reyes Ramos, de la Comisión de Salud, Doctor Manuel Orlando Cabrera Candray.

Pronunciamientos:

- Pronunciamiento público en el marco del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.
- Pronunciamiento público en el marco del Día Nacional de la Persona Ciega, que se conmemora cada 01 de marzo.
- Pronunciamiento público en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 02 de abril.
- Pronunciamiento público en el marco del noveno aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Informes:

Informe Alternativo El Salvador, en seguimiento a las Observaciones Finales al Estado Salvadoreño 2013-2017 (para la Lista de Cuestiones) elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones de y para personas con discapacidad que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, presentado en el mes de abril del 2017 ante el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.

Opiniones:

- Opinión técnica enviada a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa, a requerimiento del Diputado David Ernesto Reyes Molina, en relación a la reforma al artículo 34 Bis de la Ley de Transporte.
- Opinión técnica sobre reforma constitucional al artículo 37, requerida por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

- Opinión técnica de oficio sobre propuesta de Ley de Salud Mental, remitida a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.

▪ *Reuniones con autoridades públicas, organismos internacionales y sociedad civil*

Se han sostenido reuniones con diversas instancias, como por ejemplo con la Presidencia del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad; la coordinadora de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad de la División de Bienestar Policial; con la Dirección del Centro de Rehabilitación para ciegos "Eugenia viuda de Dueñas"; con el Director Ejecutivo de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, para coordinación de trabajo interinstitucional. Asimismo, se realizaron reuniones de coordinación bilateral con organizaciones que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad.

También se hizo una videoconferencia con representante de la Organización Internacional por la Discapacidad (IDA, por sus siglas en relación al Cumplimiento de las Observaciones Finales al Informe Inicial del Estado en inglés) y con representante de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (ICC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de recibir asesoría técnica relativa a la elaboración del Informe Alternativo para la Lista de Cuestiones 2013 – 2017 2013.

En cuanto a los acompañamientos, estos se han dado a organizaciones que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad con los cinco grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa y diversas reuniones con diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del FMLN, que conforman la Comisión de la Familia, Niñez, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de la Asamblea Legislativa; así como en la audiencia con la Comisión Legislativa de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad, en relación a petición sobre el

proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esa reunión fueron entregados 10 ejemplares de las Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de El Salvador, para las diputadas y diputados, así como para sus equipos asesores.

▪ **Participación en mesas interinstitucionales**

Se coordinó la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, incluidas las diferentes comisiones de trabajo a través de reuniones ordinarias, realizadas mensualmente o extraordinarias; así como el seguimiento a sus acuerdos.

Se participó como entidad observadora en las sesiones mensuales de trabajo del Comité Técnico y del Pleno del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad – CONAIPD.

Ha habido participación en las sesiones trimestrales de trabajo en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado – FOPROLYD, a través del espacio “Foro Participativo”, en calidad de institución observadora.

▪ **Verificaciones y mediaciones realizadas**

Centro de Excelencia para la Niñez con Inmunodeficiencia, CENID – Hospital Nacional de Niños y Niñas “Benjamín Bloom”.

Centro de acogimiento Hogar Adalberto Guirola, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia – ISNA.

Proceso electoral de representantes de sociedad civil del Comité Técnico y Pleno del Consejo Nacional de Atención Integral a la persona con Discapacidad – CONAIPD, período 2017 – 2019.

Verificación en diferentes centros educativos tanto privados como públicos, en relación a condiciones de inclusión y accesibilidad sobre aplicación de la Prueba de Aptitudes para Estudiantes de Educación Media – PAES – específicamente para estudiantes

con discapacidad en diferentes Centros de Educación.

Verificación in situ en coordinación con el Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad – CONAIPD, en las instalaciones del Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, con el objetivo de constatar las condiciones de accesibilidad física del lugar.

De la misma manera se constató las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad visual – ciegas y de baja visión que son usuarios y usuarias de la Sala Braille de la Biblioteca Nacional “Francisco Gavidia”.

Verificación de las condiciones de accesibilidad para las personas con diferentes discapacidades en la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Nacional.

Verificación en las instalaciones del Hospital General y de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez” a efecto de constatar la atención brindada por el personal médico y paramédico de dicho centro hospitalario a una joven con discapacidad (síndrome down).

Se realizó verificación en las instalaciones del Policlínico del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial – ISBM con sede en el municipio de Soyapango relacionado con el expediente SS-0046-2014 a requerimiento del Departamento de Seguimiento.

Se realizó verificación para constatar la atención brindada a una persona con discapacidad ingresada en el Hospital Nacional Rosales, en coordinación con médico de esta Institución, Doctor Eduardo Bonilla, a requerimiento del señor Procurador Adjunto.

▪ **Asistencia y participación a eventos nacionales e internacionales**

La participación de este Departamento ha sido en eventos conmemorativos, diplomados, jornadas, talleres, capacitaciones, cine foros, y otras actividades. Entre los primeros están: la presentación del proyecto “Apoyo en la

promoción de la justicia para las mujeres en El Salvador”, en el marco del Día Internacional de la Mujer; marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, coordinada por organizaciones sociales; el quinto Festival de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad “No me impongas la discapacidad, mira mi capacidad”, realizado por la Delegación Departamental PDDH La Libertad; actividad conmemorativa del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, organizado por el Departamento de Atención a Víctimas de la Corte Suprema de Justicia; evento conmemorativo del cuadragésimo cuarto aniversario de la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños – ANCIESAL; en el marco de la conmemoración del día internacional de la persona sorda se asistió al evento sobre la inclusión de las personas con discapacidad, organizado por el CONAIPD y la Comunidad Sorda de El Salvador.

Se asistió a los cine fórums siguientes: sobre la película “North Country (Tierra Fría)” en el marco del Día Internacional de la Mujer; al documental de “Marie Curie”, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia; sobre derechos humanos – presentación de la película “De la guerra a la paz en Centroamérica”; presentación de la película: “Garage Olimpo” en el día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura; la presentación del volumen III del largo metraje documental “El Salvador: archivos perdidos del conflicto” por celebrarse el Día Nacional de la Paz; y en el documental sobre “Madres Coraje – Madres Plaza”.

También se ha tenido presencia en el Diplomado en Ética Pública, convocado por el Tribunal de Ética Gubernamental. En los talleres; “Seminario de capacitación virtual sobre capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad en El Salvador” organizados por el Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad –CONAIPD y la Organización de Estados Americanos – OEA; en el de “Inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y desastres”, promovidas desde la comisión

del desarrollo inclusivo y gobernabilidad del CONAIPD, con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF y CONAIPD; en taller de sensibilización con autoridades estatales y actores locales en temas de derechos humanos, género, protección, trabajo sexual, estigma y discriminación, organizado por Plan Internacional y Orquídeas del Mar; en otro organizado por el CONAIPD sobre los Objetivos de Desarrollo y Sostenible – ODS/ agenda 2030 y Discapacidad.

Hubo participación también en la jornada de inducción sobre la Ley de ética pública, organizada por el Tribunal de Ética Gubernamental; en el foro sobre el derecho humano a la salud y a la mala praxis en los servicios de salud; y en una capacitación sobre “Diversidad Sexual”.

Finalmente, se asistió a diversas presentaciones de los proyectos, informes y documentos. Entre los primeros está el de “Apoyo a la Promoción de la Justicia Especializada para las Mujeres en El Salvador”; de Participación y Protección de las Personas con discapacidad en Emergencias y desastres en América Central auspiciado por el CONAIPD Dirección General de Protección Civil con el apoyo de UNICEF. Asimismo, el informe de rendición de cuentas de: CONAIPD, del FOPROLYD y del ISRI; y del “Cuarto informe sobre el Estado del Derecho a una alimentación adecuada en El Salvador”. Además, se presenció la exposición del documento propuesta de Ley de Inclusión para personas con discapacidad desarrollado por la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador – ALGES.

▪ Entrevistas en medios de comunicación

En lo relacionado con actividades en medios de comunicación, se participó en el lanzamiento de la campaña pública de incidencia para la discusión y aprobación del proyecto de “Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad”, así como también en entrevistas en radio YSUCA 91.7 F.M. en el programa “Con los Ojos del Alma, y otras concedidas a estudiantes de grado y maestrías de diferentes Universidades, respecto de trabajos de investigación relativos

a derechos de las personas con discapacidad. Específicamente a estudiantes de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencias Jurídicas, todas de la Universidad de El Salvador.

▪ *Otras actividades relevantes*

Se ha coordinado con organizaciones de personas con discapacidad, diferentes unidades internas PDDH, así como diferentes instituciones, en la facilitación de los servicios de interpretación por parte del intérprete institucional de LESSA de acuerdo a los siguientes requerimientos: Juzgado Tercero de Instrucción San Salvador, Oficina Fiscalía General de la República de Cojutepeque, Procuraduría General de la República.

Se brindó seguimiento a proceso de contratación de servicios de intérprete de Lengua de Señas Salvadoreña – LESSA.

Se elaboró diseño de trípticos informativos del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos y del proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad; así como, diseño de documento “Observaciones Finales sobre el informe inicial de El Salvador, aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para su publicación.

Aportes en la elaboración del documento síntesis del Informe Alternativo El Salvador, en seguimiento a las Observaciones Finales al Estado salvadoreño 2013 - 2017 (para la Lista de Cuestiones, para la sesión privada del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos con Discapacidad con una representación de sociedad civil de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad.

Preparación de respuestas al “Cuestionario sobre Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad en El Salvador”, a petición del Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano, para ser presentado a la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

iii. **Derechos de las personas migrantes y sus familiares**

El Departamento de Atención a la Personas Migrantes es una dependencia adscrita a la Procuraduría Adjunta de Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana. En el periodo que abarca el presente informe, este Departamento realizó 45 verificaciones, entre las que se pueden mencionar diligencias de verificación de procesos aplicados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en casos de personas migrantes albergadas en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM); visitas a los Centros de Atención a Víctimas de Trata para identificar de las condiciones de atención psicosocial, jurídicas y materiales de niñas, niños y adolescentes con medidas de protección; seguimiento de casos de connacionales migrantes no localizados, repatriados, retornados o detenidos en otros países o de personas migrantes extranjeras en El Salvador realizadas en la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; entre otras.

Además, se ha brindado atención psicológica a personas migrantes víctimas y familiares en 46 ocasiones ya sea por medio de sesiones individuales, acompañamiento a familiares de migrantes localizados y no localizados, y en forma de talleres de apoyo. Asimismo, se han brindado 5 talleres, capacitaciones y charlas en temas de niñez migrante; la migración y sus ámbitos de acción jurídicos y psicológicos; sobre el plan de trabajo y abordaje psicosocial con familiares de migrantes no localizados; grupos en condición de vulnerabilidad: personas migrantes; y, sobre el día internacional del migrante.

En cuanto al Banco de Datos Forenses, se han realizado un total de 26 actividades entre las que están: toma de muestras a familiares de personas no localizadas; notificaciones de identificación positiva de restos de migrante; repatriaciones de restos de migrantes; reuniones de coordinación de directorio y equipo técnico

del Banco de Datos; y, diligencias para el Banco de Datos Forenses, reuniones con familiares y con actores estratégicos vinculados. Asimismo, se han brindado un total de 49 orientaciones para casos que no eran competencia de esta Procuraduría.

Teniendo en mente la importancia de este tema en la realidad salvadoreña, esta Procuraduría ha obtenido la cooperación brindada por la Delegación de la Unión Europea en El Salvador a través del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la atención a víctimas migrantes, con enfoque en derechos”, el cual ha permitido a la institución mejorar y fortalecer su mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes.

Con este proyecto se ha logrado que la Procuraduría tenga mayor presencia en el terreno, lo cual se traduce en una mayor supervisión e incidencia en la actuación y práctica del Estado en los lugares designados para la recepción y atención de migrantes retornados, así como en los albergues destinados para personas extranjeras y víctimas de trata de personas. A su vez, este esfuerzo ha permitido ampliar los procesos de atención de forma integral y se ha logrado visibilizar el impacto psicológico que los fenómenos migratorios generan en las familias, permitiendo que los usuarios refirieran su credibilidad en la institución.

Es oportuno destacar como un nuevo servicio que presta la institución la asistencia psicosocial brindada por profesionales de la psicología a las familias que forman parte del Banco de Datos Forense de Migrantes no Localizados en las diversas etapas del proceso: toma de muestras de ADN, búsqueda, notificación de resultados, seguimiento y repatriación; todo ello ha permitido que las personas usuarias cuenten con espacios de expresión emocional y diferentes necesidades relacionadas a la desaparición y muerte de sus familiares. Por lo tanto, esta es una herramienta invaluable al

servicio de las familias y usuarios que se brinda por medio del abordaje psicológico, con el acompañamiento previo a las notificaciones de resultados de identificación forense.

Desde septiembre de 2016, los profesionales en psicología han realizados 19 sesiones individuales beneficiando a 26 familiares de migrantes fallecidos ya repatriados. De igual manera, se efectuaron 5 talleres con familiares de migrantes no localizados, actividades en las cuales también se les brindó apoyo jurídico. Por otra parte, también se proporcionó apoyo a dos familias en la Embajada de Estados Unidos Mexicanos en El Salvador durante notificación de resultados de identificación realizada por la Comisión Forense de México y Procuraduría General de México, ante solicitud de exhumación de restos de familiares repatriados.

Como un hecho destacable para el reconocimiento del derecho a la verdad y de acceso a la justicia a familias de migrantes salvadoreños, se apoyó y acompañó a 13 familias en toma de denuncias bajo el mecanismo de apoyo en el exterior, en coordinación con organizaciones civiles de El Salvador, actividad realizada en la sede de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país.

Hasta la fecha que incluye este informe, el Banco de Datos Forenses ha realizado ingresos de casos de toma de muestra de ADN, alcanzando la cifra de 291 casos registrados. Asimismo, se ha realizado la identificación de restos de migrantes localizados y se han notificado los resultados a las familias en 7 casos; de igual forma, se han tramitado 3 repatriaciones de restos por medio de gestiones oportunas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, la Procuraduría ha incrementado presencia verificando la llegada de compatriotas vía terrestre y aérea realizando 9 visitas in situ a efecto de monitorear la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la recepción, en especial de niños, niñas y adolescentes que llegan retornados.

iv. Derechos de las personas adultas mayores

El Departamento de la Persona Adulta Mayor y Derechos Humanos (DPAM) tiene como principal función la colaboración en la atención de casos y la coordinación con departamentos del sistema de tutela y las delegaciones departamentales para el trámite de casos en materia de violaciones de derechos humanos de personas adultas mayores.

▪ *Asistencia técnica sobre denuncias recibidas en la temática de Personas Adultas Mayores*

Durante este periodo, el DPAM ha atendido –directamente o en conjunto con otras dependencias– 13 casos relativos a denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos de personas adultas mayores. Asimismo, se han coordinado procesos de medidas cautelares, y se han realizado interposiciones de buenos oficios. Se han trabajado casos relacionados principalmente a violaciones relativas al derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, maltrato y abandono, entre otros.

En materia de derecho al trabajo, se pueden mencionar tres casos de personas adultas mayores que argumentaban violación al derecho al trabajo por actos arbitrarios contra la estabilidad en el empleo por razón de la edad, ya que fueron víctimas de posibles despidos de parte de la Empresa de Seguridad COSASE y Organización de Damas Salesianas-Iglesia Don Rúa, como PDDH se hicieron las intervenciones inmediatas con el objeto de buscar soluciones a dichas problemáticas, logrando solventar las situaciones expuesta por las personas denunciantes.

En cuanto al derecho a la salud, se han recibido denuncias por desabastecimiento de medicamentos e insumos en el Hospital Nacional Especializado Rosales, específicamente en los servicios de Hematología, Cuidados Intensivos y Sala de Operaciones, para pacientes con cáncer, melanoma, tumor renal, leucemias entre otros; así también desabastecimiento de medicamentos en el Hospital Nacional General

y de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez” para pacientes adultos mayores con diagnóstico de esquizofrenia; en la mayoría de los casos se ha logrado incidir en las autoridades del MINSAL para que las personas reciban los medicamentos que necesitan. Asimismo, se ha brindado opinión técnica y asesoría a la Unidad de Geronto-geriátrica de la Unidad Médica Atlacatl del ISSS referente al consentimiento informado en la atención del servicio de salud en paciente adulta mayor.

También se recibieron denuncias por el derecho a la seguridad social, por diferentes problemáticas para acceder a pensiones por vejez, sobrevivencia e invalidez, en estos casos se han solicitado informes a las autoridades correspondientes del INPEP, ISSS, IPSFA, acciones inmediatas y se ha orientado a las personas a partir de las respuestas recibidas.

Además, el Departamento de Personas Adultas Mayores y Derechos Humanos brindó un total de 6 asistencias técnicas relativas a posibles afectaciones de derechos humanos de las personas adultas mayores. Concretamente, se han brindado orientaciones a personas adultas mayores y representantes de organizaciones.

Asimismo se han realizado gestiones ante la Secretaría de Inclusión Social (SIS), a raíz de las peticiones de los miembros de la Asociación de Veteranos Héroes de Guerra del Sesenta y Nueve “Héroes del 69”, la cual está conformada por personas adultas mayores con más de 70 años de edad que no cuentan con beneficios económicos de parte del Estado, para quienes la PDDH ha solicitado la inclusión de este grupo de personas mayores en el Programa Nuestros Mayores Derechos y puedan ser beneficiados de la Pensión Básica Universal (PBU).

Por otra parte se han atendido casos de personas adultas mayores que sufren abandono y maltrato; al respecto se han dirigido Oficios a los Juzgados de Familia competentes solicitando la protección integral que como personas adultas mayores tienen derecho y un informe sobre las medidas de protección a implementarse para la erradicación de la problemática expuesta en cada uno de los casos.

Cabe señalar que se han desarrollado acciones de coordinación y apoyo con el Departamento de Denuncias, específicamente con la Unidad de Acciones Inmediatas, en lo relativo a la atención de casos de personas adultas mayores que con una intervención de esta Procuraduría se ha logrado solventar sus casos, como también se han emitido opiniones técnicas solicitadas a este Departamento sobre la temática de adultez mayor en expedientes tramitados en el Departamento de Procuración y algunas Delegaciones Departamentales.

▪ *Verificaciones y mediaciones realizadas*

Dentro de las verificaciones destacadas como Departamento de la Persona Adulta Mayor y Derechos Humanos, se verificó la elección de los representantes de las organizaciones de Personas Adultas Mayores ante el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores -CONAIPAM, el cual tuvo lugar en las instalaciones de la SIS bajo la coordinación de la Dirección de la Persona Adulta Mayor.

También se realizaron dos verificaciones para constatar la atención brindada a personas adultas mayores institucionalizadas en los Centros de Atención: Residencia Manderley, Ciudadela Dr. Julio Ignacio Díaz Sol, en coordinación con personal técnico de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, PGR, Ministerio de Trabajo, ISSS, Ministerio de Salud.

▪ *Reuniones con autoridades públicas, organismos internacionales y sociedad civil*

Reunión de trabajo con las organizaciones que integran la Mesa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta Procuraduría, en la cual se abordó como uno de los puntos principales de agenda el seguimiento a la estrategia de cabildeo en la Asamblea Legislativa de las reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.

Reunión de seguimiento con diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del FMLN, que conforman la Comisión de la Familia, Niñez, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de la Asamblea Legislativa.

▪ *Participación en mesas interinstitucionales*

Como Departamento de la Persona Adulta Mayor y Derechos Humanos se ha mantenido trabajando de forma conjunta con distintas organizaciones sociales, principalmente con las y los representantes de la Mesa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores con quienes se ha sostenido reuniones en las que se ha ejecutado y evaluado el cumplimiento del Plan de Trabajo 2016, se ha elaborado el Plan de Trabajo 2017 y se ha continuado con el trabajo en distintas comisiones para promover el análisis.

Se coordinó la Mesa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta Procuraduría, incluidas las diferentes comisiones de trabajo a través de reuniones quincenales, realizadas mensualmente o extraordinarias; así como el seguimiento a sus acuerdos.

Se participó como entidad observadora en la sesión mensual de trabajo del Comité Técnico de Apoyo a los Programas de los Adultos Mayores del CONAIPAM.

▪ *Asistencia y participación a eventos nacionales e internacionales*

Se asistió a la presentación del Proyecto "Protocolo de Atención a Casos Internos sobre Violencia y Discriminación Contra la Mujer" y "Juramentación de la Comisión de Seguimiento de la Política de Género" y la Presentación de la Política Institucional de Género", convocada por la Procuraduría Adjunta de la Mujer y la Familia y el Departamento de Recursos Humanos de la PDDH.

También se ha participado en calidad de observadores en seis reuniones de trabajo (junio-noviembre 2016) y tres reuniones (febrero-abril 2017) con las y los miembros del Comité Técnico Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores, en las cuales se han acordado, entre otros, los siguientes puntos relevantes: Coordinación de visitas a Centros de Atención de Personas Adultas Mayores a nivel nacional, Organización de Taller sobre

el Modelo de Atención de Personas Adultas Mayores del Ministerio de Salud, Elaboración de argumentos de justificación para solicitar la prórroga del Decreto de Ley Transitoria de Asentamientos de Partidas de Nacimiento de Personas Adultas Mayores.

▪ **Pronunciamientos emitidos**

Desde este Departamento se colaboró en la elaboración de tres pronunciamientos institucionales, siendo el primero el 15 de junio de 2016, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional contra el abuso y maltrato al adulto mayor, un segundo en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, 1 de Octubre de 2016; y un tercero en enero de 2017 basado en la Conmemoración del Mes de la Persona Adulta Mayor.

4.1.1. Otras acciones relacionadas con la protección de los derechos humanos

i. Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones

Dentro de los mecanismos establecidos en la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones (en adelante LEIT) para garantizar la correcta utilización del procedimiento de intervención de las telecomunicaciones, la PDDH tiene la misión de velar por el respeto y la garantía del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

El artículo 33 incisos 2º, 3º, 4º y 5º de la LEIT¹⁰ establece funciones al Procurador o Procuradora

10 LEIT: Artículo 33 incisos 2º, 3º, 4º y 5º “El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos deberá designar personal idóneo para que practique anualmente una auditoría a las actividades del Centro y remitirá el informe respectivo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. También procederá a realizar auditorías específicas si lo estimare conveniente, de oficio o cuando mediare una denuncia sobre la violación del derecho a la intimidad o secreto de las telecomunicaciones. En esos casos las auditorías específicas se anexarán al informe general.

En estos supuestos los funcionarios de la Procuraduría estarán obligados a guardar especial reserva sobre la información que obtengan en ejercicio de esta facultad de fiscalización.

La Fiscalía General de la República deberá brindar la colaboración necesaria para los efectos antes indicados.

Los informes y resoluciones de la Procuraduría sobre el ejercicio de esta facultad sólo podrán hacerse públicos al comprobarse alguna de las infracciones previstas en la presente Ley.”

para la Defensa de los Derechos Humanos, quien deberá designar personal idóneo para que practique anualmente una auditoría a las actividades del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (en adelante CIT) y que remita un informe a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. También procederá a realizar auditorías específicas si lo estimare conveniente, de oficio o cuando mediare una denuncia sobre violación del derecho a la intimidad o secreto de las telecomunicaciones. En esos casos las auditorías específicas se anexarán al informe general.

La intervención de las telecomunicaciones es una técnica de investigación de primer orden, considerada muy eficaz para la obtención de los elementos probatorios para los procesos penales de los autores y partícipes de la delincuencia grave, organizada o transnacional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a los artículos 24 inciso 2º de la Constitución y 1 de la LEIT,¹¹ se garantiza el secreto de las telecomunicaciones y el derecho a la intimidad. La intervención de las telecomunicaciones tiene, por tanto, un carácter excepcional y solo podrá autorizarse de manera temporal mediante autorización judicial. Esto quiere decir que la intervención de un juez que actúa autorizando el procedimiento es un requisito sine qua non y está sujeto a las reglas que expresamente establece la LEIT. En este sentido, el juez no solo cumple una labor de autorización inicial del procedimiento, sino que además debe realizar un control judicial de cómo el CIT está cumpliendo la misma.

Adicionalmente, la LEIT establece como segundo mecanismo de control la fiscalización y auditoría del CIT que encomienda a esta Procuraduría y de cuyos resultados trata el presente informe. Es de hacer notar que el control judicial de la intervención pretende que

11 LEIT: Artículo 1: “Se garantiza el secreto de las telecomunicaciones y el derecho a la intimidad. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de la información privada que no guarde relación con la investigación o el proceso penal. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor.”

cada caso sea revisado y que se cumplan con los requisitos y plazos legales. Se trata, pues, de un control individual en tanto que la fiscalización y auditoría del Centro va orientada a supervisar la actuación en conjunto del trabajo de la Fiscalía General de la República cuando realiza la intervención de las telecomunicaciones, así como de las otras instituciones a las que se les asignó atribuciones, y excepcionalmente puede centrar su atención en un caso específico.

Desde el inicio de las labores de este Departamento se han presentado los informes anuales respectivos a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, se han realizado dos auditorías específicas, una de oficio y por denuncia interpuesta, en aras de garantizar el derecho a la intimidad y el secreto a las telecomunicaciones.

ii. Unidad de Atención Especializada a las Mujeres Víctimas de Violencia (UAE)

Como parte del objetivo de la Unidad de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de brindar servicios integrales a mujeres que enfrentan hechos de violencia, bajo la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV).

En razón de lo anterior, esta Unidad ha conocido dos denuncias realizadas por mujeres víctimas de acoso sexual contra funcionarios de alto rango del Estado, y que actualmente se encuentran en trámite. Se han atendido sesenta casos de mujeres víctimas de violencia; cuarenta y cinco orientaciones y remisiones a otras instituciones y Delegaciones Departamentales; dieciséis intervenciones en crisis; se han iniciado cinco denuncias; se han realizado sesenta investigaciones especializadas; ocho resoluciones finales dos con recomendaciones; se les ha dado seguimiento a dos casos; y se encuentran siete procesos en investigación.

De igual forma, esta Unidad ha brindado acompañamientos a mujeres a distintos Tribunales del país donde se han celebrados audiencias de sentencia y preliminares, y a instituciones públicas como Fiscalía General de la República y

Procuraduría General de la República.

Por otra parte, el personal de la Unidad de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, han asistido a diferentes reuniones de trabajo como parte del fortalecimiento interinstitucional al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en la Comisión Técnica Especializada; en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido la participación el Comité Consultivo para la creación del protocolo de Atención a Mujer Migrante; en el Ministerio de Salud, se ha trabajado con la Alianza Intersectorial de Salud de adolescentes y jóvenes, participando en la mesa de violencia y en el tema de Violencia obstétrica. A nivel interno se han asistido a diferentes reuniones con la Red de Referentes de Género, con el objetivo de elaborar de manera conjunta con la Procuraduría Adjunta de la Mujer y la Familia y la Unidad de Género Institucional el Protocolo Interno de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

También se han hecho solicitudes de informes a la Fiscalía General de la República, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y al Órgano Judicial en ocasión de darle seguimiento a casos que se han iniciado sobre violencia hacia las mujeres; asimismo, se han emitido diferentes directrices para la tramitación y resolución de casos de violencia contra la mujer.

Además, esta Unidad ha brindado atención psicológica a 16 mujeres usuarias de la Unidad de violencia así como de otros departamentos de la PDDH.

En diciembre de dos mil dieciséis se realizó la presentación del estudio especializado sobre casos emblemáticos de violencia en contra de las mujeres y acceso a la justicia, informe donde se evidenciaron los patrones de impunidad que funcionarias y funcionarios en el ámbito judicial ejecutan, y que a la vez se puede catalogar como una violencia institucional. En dicho informe se concluyó que la violencia contra las mujeres es estructural y que debe entenderse como un contínuum de violencia con diversas manifestaciones y condiciones que generan contextos de mayor vulnerabilidad

respecto del recrudecimiento de las violencias que viven las mujeres. Por ejemplo: mujeres indígenas, migrantes, refugiadas o desplazadas, mujeres con discapacidad, adultas mayores, adolescentes o niñas, que viven en condiciones de pobreza, mujeres afectadas por conflictos armados, mujeres privadas de libertad, mujeres con VIH, mujeres lesbianas o bisexuales, etc.¹²

iii. Unidad de Género Institucional

La Unidad de Género Institucional (UGI) comenzó a funcionar el 8 de agosto del 2016. Desde entonces, los logros de esta unidad han sido los siguientes:

Hasta mayo de 2017, la UGI ha logrado coordinar de forma sistemática con la Red de Referentes de Género que es uno de los mecanismos institucionales de seguimiento a la Política Institucional de Igualdad de Género (PIIG) integrada por una persona designada por la delegada/o departamental para que forme parte de la red, cuya función principal es dar seguimiento a la PIIG y garantizar la información sobre las acciones que con enfoque de género se realizan en la PDDH. Desde este mecanismo se brindó información que sirvió de base para la elaboración del informe final del Plan de Acción 2015-2016 de la PIIG, así como también la elaboración de la "Matriz de Resultados del Plan de Acción 2017-2018".

Como parte del Plan de Acción de la PIIG 2015-2016, a inicio de septiembre de 2016 se echó a andar la elaboración del "Protocolo de atención a casos internos sobre violencia y discriminación por razones de género", proceso de elaboración que contó con el apoyo de la Red de Referentes de Género para su contenido; es así como en el mes de diciembre se presenta el primer documento borrador a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia. Posteriormente, y para retroalimentar los contenidos del documento, se realizaron una serie de consultas a nivel interno. El documento final fue aprobado en febrero y presentado en el mes de abril, con lo que se logró obtener una ruta establecida de atención para el abordaje de los

¹² Estudio Especializado sobre casos Emblemáticos de Violencia en Contra de las Mujeres y Acceso a la Justicia. Página 7

casos internos sobre violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres desde el fundamento de la dignidad humana.

4.1.2. Departamento de Derechos Políticos

A continuación se presentan los principales logros del Departamento de Derechos Políticos durante el periodo 2016-2017.

■ *Asistencia técnica sobre denuncias recibidas en el tema de derechos políticos*

Se realizaron 17 diligencias de buenos oficios y acciones inmediatas para facilitar trámites de documentos en Alcaldías municipales de San Salvador, Mejicanos, Santa Tecla y Tribunales; así como diligencias relacionadas a expedientes que se encuentran en el departamento de Derechos Políticos próximos a emisión de resolución final.

■ *Documentos firmados por la señora Procuradora (pronunciamientos, informes, opiniones, entre otros)*

En coordinación con la Procuraduría Adjunta de la Niñez, se elaboró una propuesta de documento que justifica la necesidad de reformarse el Código Electoral y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer de forma obligatoria que las personas que opten a cargos públicos de elección popular y de elección que corresponden a la Asamblea Legislativa estén solventes con el pago de la pensión alimenticia en caso de estar obligados a ello.

Se elaboró una opinión que contiene las valoraciones respecto a la propuesta de reformas al artículo 165 del Código Electoral y el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos que fue presentada por el Grupo Parlamentario de Mujeres.

■ *Documentos directamente relacionados al Observatorio electoral*

Se emitieron las primeras indicaciones y se informó sobre la suspensión de cambios de

domicilios en el registro electoral. Se elaboraron varias propuestas de documentos, como uno de apoyo en los temas a desarrollar en reunión que la señora Procuradora sostuvo con los Magistrados y Magistradas que conforman el pleno del Tribunal Supremo Electoral; otro sobre el presupuesto para el funcionamiento de todos los programas del Plan de Verificación y Observación Electoral 2017-2018; sobre el Plan de Verificación y Observación Electoral, que actualmente esté en proceso de aprobación; y se remitió para revisión de la PADCI un pronunciamiento sobre la falta de aprobación del presupuesto especial para elecciones.

▪ **Reuniones con autoridades públicas, organismos internacionales y sociedad civil**

La señora Procuradora sostuvo una reunión con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para abordar temas relacionados a los próximos eventos electorales, dicha reunión se efectuó el día 30 de marzo del presente año y fue acompañada por la Procuradora Adjunta de Derechos Civiles y el Jefe del Departamento de Derechos Políticos.

Así mismo se efectuaron acciones de incidencia para lograr reformas en las normas electorales para garantizar alternancia en participación política de las mujeres, en las que se tiene como organización aliada a la Asociación Nacional de Mujeres Regidoras, Sindicas y Alcaldesas (ANDRYSAS). Entre las actividades más relevantes se mencionan las siguientes: 1-La PADMF impulsó la firma de un convenio de cooperación entre la PDDH y ANDRYSAS, el documento del convenio tuvo observaciones del Departamento de Derechos Políticos; 2- Se participó en una serie de eventos organizados por ANDRYSAS; 3- La ejecución del Convenio marco colaboración y coordinación entre la PDDH y ANDRYSAS, incluyó como primer punto la planificación conjunta una serie de capacitaciones dirigidas a las mujeres políticas, con temas sobre teoría de género, legislación y recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos Humanos, y análisis de la legislación nacional y reformas que se han aprobado y que serán efectivas en la próxima elección.

▪ **Actividades con otras organizaciones**

Se brindó acompañamiento al Foro Intersectorial y Organización Acción Ciudadana quienes están promoviendo reformas a la Ley de Partidos Políticos para volver efectivo el cumplimiento de obligación de transparencia financiera.

Asimismo, se asistió al foro: “Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la CSJ” evento que fue organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, DTJ, FUNDE y la Universidad Alberto Masferrer 4/04/2017. Tema relacionado a los procesos de elección de magistrados de altas cortes.

Finalmente, se dio acompañamiento a la Red por el Derecho a la Comunicación REDCO en reuniones de trabajo, y participación en eventos públicos, como la presentación de la “propuesta de una política pública en comunicaciones: un aporte desde el sector comunitario no lucrativo”.

▪ **Verificaciones y mediaciones realizadas**

Junto con el Procurador Adjunto para las personas Migrantes y Seguridad Ciudadana se verificó y observó la asamblea general y elección de miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que se realizó el sábado 9 de julio de 2016.

Asimismo, en octubre de 2016 personal del departamento de Derechos Políticos colaboró en el proceso de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, conocida como PAES, con especial atención en los estudiantes con discapacidad que se sometieron a la misma.

Además, personal del Departamento de Derechos Políticos, bajo coordinación del Departamento de Personas con Discapacidad de la PDDH, verificó el desarrollo de las elecciones de los representantes titulares y suplentes de la sociedad civil en el pleno y Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, en noviembre de 2016.

▪ Otras actividades relevantes

Desde este Departamento se han realizado análisis de las reformas aprobadas por la Comisión de Reformas Electorales, y que contienen un cuadro comparativo entre la anterior y la nueva disposición; además, de un resumen de los aspectos más importantes de la reforma y las implicaciones de estos cambios. Esta práctica se viene realizando desde el año anterior, pero en el segundo semestre del año se hicieron lo siguientes análisis de las reformas: a) la integración y requisitos de los organismos electorales temporales (OET); b) reforma al artículo 142 del Código Electoral que se refieren al inicio y cierre del período de inscripción de candidaturas, así como las segundas reformas a varios artículos de la Ley de Partidos Políticos que están referidos a las elecciones internas de los partidos políticos; c) la reforma del artículo 195 del Código Electoral sobre el voto de agentes policiales, estudiantes de la ANSP, Fuerzas Armadas y fiscales.

Finalmente, personal del Departamento de Derechos Políticos colaboró con la PADCI en la organización de las actividades para la Conmemoración del 67° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 35 años de la Masacre del Mozote, Morazán. Para el desarrollo de la actividad se efectuaron varias reuniones de planificación y actividades como la coordinación con representantes para la asistencia y el transporte de organizaciones sociales y comunidades de Santa Tecla, San Martín, Ilopango, Soyapango, Cojutepeque, Sonsonate; además, del apoyo en la organización de los equipos de toma de asistencia y entrega de materiales a todas las personas que llegaron a la actividad.

4.1.3. Procuradurías Adjuntas específicas

A continuación se destacan algunos casos atendidos por las Procuraduría Adjunta específicas ante diferentes instancias públicas solicitando información e instando a la adopción de medidas para proteger o garantizar los derechos humanos.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, (PADNJ) ha dado acompañamiento y conducción directa en diversos casos referidos a posibles afectaciones a derechos de niñez y adolescencia, requiriendo de las autoridades pertinentes tomar medidas inmediatas para investigar las situaciones específicas. Por otra parte, además de la elaboración de diversas resoluciones iniciales y finales, también se verificaron las condiciones en que son recibidos niños, niñas y demás personas migrantes retornadas; también se ha dado seguimiento a un caso de un niño fallecido a causa de complicaciones por cáncer osteosarcoma, realizando investigación sobre negligencia del Hospital Nacional Benjamín Bloom; así como también se ha dado seguimiento al caso de sustracción de un niño hacia la República de Nicaragua.

Además, ha brindado orientaciones a otras áreas de la Procuraduría con el fin de resolver situaciones en las que se presentaban posibles violaciones a derechos humanos de la niñez y adolescencia. Asimismo, ha realizado gestiones para el manejo de los nombres de las personas menores de 18 años de edad en los expedientes internos como en las acciones ante instituciones del Estado.

Lo relativo al impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas, la PADNJ ha participado apoyando a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno. Asimismo, se elaboró documento sobre el proceso de aprobación de la Ley de la referida Comisión.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia (PADMF) en cuanto a la revisión de procedimientos específicos para la tramitación de denuncias y el establecimiento de criterios y lineamientos para la atención adecuada de casos, elaboró un protocolo de atención a casos internos de violencia en contra de la mujer.

En cuanto al impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas se emitió opinión técnica para la reforma del artículo 186 del Código de Familia, y se dio acompañamiento

en la iniciativa ante la Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo Electoral a fin de que las papeletas electorales se hagan con alternancia de sexo para que las mujeres mantengan una posición ganadora y una mayor participación en las elecciones a Concejos Municipales.

Además, y en lo relacionado con la conducción técnica y funcional de departamentos y unidades especiales, se activó la Comisión Institucional de seguimiento para la implementación y transversalización de la Política Institucional de Igualdad de Género (PIIG).

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales (PADCI) ha girado instrucciones a nivel nacional para la atención adecuada de casos. Entre las mismas se encuentran las que dan trámite a casos de homicidios de personas LGBTI ocurridos entre enero y febrero de 2017. También se ha solicitado a las Delegadas y Delegados Departamentales, jefaturas del Sistema de Protección y turno su colaboración en cuanto a rendir informe sobre los casos de desplazamiento forzado por causa de la violencia social, crimen organizado y pandillas, especificando las acciones realizadas, denuncias y orientaciones, en los que también se debe especificar la presencia de grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre otras actividades de protección, se solicitó al Ministerio de Educación audiencia con el objeto de tratar la preocupación de las organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, con respecto a la enseñanza permanente en los centros escolares del náhuatl como lengua materna y como una forma de conservación y protección integral de la cosmovisión indígena y educación ancestral. Asimismo, se realizó visita en la zona del ex bolsón de Nahuaterique para reinaugurar la Oficina de Enlace y Verificación de los derechos humanos de los habitantes de dicho lugar. Por otra parte, se solicitó a la Fiscalía General de la República que informara sobre las acciones realizadas y el estado actual de casos sobre masacres y desapariciones acaecidas durante el conflicto armado. También se han sostenido reuniones varias con representantes del CICR, CARITAS El Salvador y Cristosal para coordinar

acciones de atención relacionado a casos de desplazamiento forzado por causa de la violencia.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, en cuanto al acompañamiento y conducción de casos atendidos directamente, esta Procuraduría atendió 31 casos por medio de la realización de diligencias, elaboración de resoluciones, recomendaciones para la investigación, y revisiones de resoluciones o seguimiento directo.

Sobre el impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas se elaboró un documento que contiene la propuesta para la elaboración del Informe especial sobre el impacto de las medidas extraordinarias; se apoyó en la elaboración del Informe anual de derechos humanos remitido a la Embajada de los Estados Unidos; se hizo una propuesta para la elaboración de una “Carta compromiso para la elaboración e implementación de una estrategia conjunta de abordaje de la realidad migratoria”, firmada entre instituciones nacionales de derechos humanos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador; se elaboró un informe sobre la situación de personas de nacionalidad hondureña que habitan Corozal y lugares aledaños; se elaboró una propuesta para la creación de un plan para la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y propuesta para la creación de un programa de asistencia para los familiares de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han muerto en el ejercicio de sus labores o en otros hechos violentos.

Asimismo, se elaboró un cuestionario dirigido a los Estados para la elaboración del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre los progresos y desafíos encontrados en las principales actividades destinadas a reforzar la cooperación técnica y el fomento de la capacidad desde el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos; se elaboró un artículo para la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos “Importancia del Principio de Legalidad en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes”; se proveyeron insumos para el cuestionario de

diseño del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI); se elaboró un informe de auditoría en torno a la fiscalización en el Centro de Intervención de Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República; se creó el Protocolo de Actuación sobre dicha función.

También, se revisó el informe intermedio presentado a la Unión Europea sobre la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en atención a víctimas migrantes con enfoque de derechos”; se elaboraron insumos para el Protocolo de actuación para la protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración y la revisión del glosario en el contexto de las reuniones de Trabajo de la Red sobre Migración y Trata de la Federación Iberoamericana de Ombudsman; se recopilaron y elaboraron insumos para establecer los avances obtenidos en el marco de las condiciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos para que El Salvador pueda optar a los recursos previstos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Lo relativo a la conducción técnica y funcional de departamentos y unidades especiales se trabaja con los Departamentos de Atención a la Persona Migrante, el Departamento de Verificación Penitenciaria, y con el Departamento de Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones. Se sostuvieron reuniones con las jefaturas en octubre y diciembre de 2016, así como en enero, marzo y abril de 2017 para la conducción de investigaciones de casos. Asimismo, se sostuvieron reuniones con el personal de atención psicológica y personal jurídico del Departamento para Personas Migrantes en enero y marzo de 2017, y reuniones con personal de todas las dependencias en abril 2017 para recopilar insumos para el diseño de la página web. También hubo reuniones con Delegados Departamentales para el abordaje de situaciones en Centros Penales en general, y Centros Penales con medidas extraordinarias.

En cuanto a otras actividades de protección que ha llevado a cabo esta Procuraduría

Adjunta se tienen: acciones de protección en el caso de habitantes del ex bolsón de Meseta Dolores por hechos ocurridos en julio de 2016 por acciones arbitrarias de la Fuerza Armada hondureña; elaboración de informe requerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición de personas en 2007; traslado y seguimiento por medio de oficios a la Fiscalía General de la República sobre los siguientes temas de discusión: casos pendientes puntuales como el de Gilberto Soto, caso de los señores Manzanares Monjarás, grupos de exterminio, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, entre otros. Asimismo, se han realizado verificaciones en procesos de repatriación forzosa de personas migrantes; se han realizado diversas gestiones y reuniones con diferentes instituciones estatales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PADESC), por su parte, y en cuanto al tema de los procedimientos específicos para la tramitación de denuncias y al establecimiento de criterios y lineamientos para la atención adecuada de casos, brinda directrices y orientaciones de forma permanente sobre casos y verificaciones a los Departamentos del Sistema de Protección y a las Delegaciones Departamentales

Con relación al acompañamiento y conducción de casos atendidos directamente o en conjunto con otras dependencias, durante este periodo, esta Procuraduría Adjunta atendió 64 casos relativos a denuncias por presuntas violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, se han impulsado 5 procesos de mediación y se atendieron 13 casos a través de acciones inmediatas e interposición de buenos oficios. Los casos mayormente atendidos estuvieron relacionados a violaciones a derechos laborales, libertades sindicales, derecho a la salud, y derecho a la propiedad, entre otros. Para cada uno de dichos casos se han desarrollado múltiples acciones desde la

emisión de oficios, reuniones, verificaciones, interposición de buenos oficios, dependiendo de la naturaleza del caso.

En la conducción técnica y funcional de departamentos y unidades especializadas, esta Procuraduría da acompañamiento al trabajo de los Departamentos de VIH y Derechos Humanos, Discapacidad y Derechos Humanos, y Personas Adultas Mayores y Derechos Humanos, desarrollando múltiples acciones de apoyo, principalmente en lo relativo a la atención de casos, revisión de oficios, posicionamientos, informes, y en lo administrativo.

En cuanto al impulso y apoyo técnico para la formulación de propuestas, se elaboraron cuatro proyectos que fueron presentados a la Embajada de Alemania (uno en materia de DESC, uno en materia de derechos de personas adultas mayores, uno en materia de derechos de personas con VIH, y uno en materia de derechos de personas con discapacidad). Asimismo, se brindó apoyo a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente en el diseño de instrumentos para entrevistas referentes al expediente sobre el caso El Chaparral; y, finalmente, se ha avanzado en la elaboración del inventario de expedientes de la PADESC.

Finalmente, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente (PADMA) ha realizado distintas coordinaciones con dependencias institucionales, especialmente con las Delegaciones Departamentales para la tramitación y resolución de expedientes relacionados con el medio ambiente, lo cual supone un proceso complejo y extenso por lo que las acciones de vigilancia, actualización y permanente fiscalización de las actuaciones estatales concentran muchos de los esfuerzos de esta adjunta.

En ese sentido también se ha pronunciado en contra de la criminalización y la deslegitimación de personas que trabajan por la defensa del medio ambiente y en particular por su trabajo en la defensa del derecho humano al agua, su modelo comunitario de gestión, la biodiversidad, la defensa de sus territorios y la deforestación en zonas de recarga acuífera.

Específicamente en el periodo que comprende al presente informe se han emitido medidas cautelares para la protección de activistas ambientales, a quienes además se les ha brindado acompañamiento para la interposición de sus denuncias penales. Asimismo se ha brindado acompañamiento en la verificación del debido proceso en casos en que organizaciones de la sociedad civil han denunciado la criminalización de su activismo en la demanda por protección del derecho al agua, destacándose el conflicto existente entre el Alcalde Municipal de Tacuba y dirigentes de poblaciones rurales del municipio en torno a un proyecto de agua que fue gestionado y durante años administrado por dichas comunidades, y en cuyo contexto, actualmente un grupo de dirigentes comunales están siendo procesados penalmente.

De igual manera se ha trabajado en el fortalecimiento de la Mesa Temática de Medio Ambiente abordando temas de gran interés para la protección de los derechos humanos tales como agua, agrotóxicos, seguridad alimentaria, minería metálica, minería transfronteriza, entre otros. En ese sentido durante el periodo se reportan 11 reuniones de coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en el trabajo de temas medioambientales.

También se ha dado seguimiento al “Informe Especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el Legado de la Mina San Sebastián y sus Impactos en la Vida de las Poblaciones Afectadas” y problemáticas relacionadas, por ejemplo la existencia de contenedores de cianuro y otras sustancias en la zona. Por otro lado se ha abierto un espacio de diálogo para atender la situación de las personas que practican la minería de forma artesanal en las comunidades afectadas.

4.1.4. Informes especiales y situacionales

La PDDH se encuentra facultada para emitir informes con la finalidad de verificar la existencia de prácticas, políticas públicas y normas violatorias de los derechos humanos y libertades fundamentales, en orden a promover medidas para erradicar o eliminar sus causas, así como

prevenir violaciones a los mismos y propiciar las condiciones para su eficaz ejercicio.¹³

Durante el período incluido en el presente documento, la PDDH elaboró doce informes relacionados con la situación de los derechos humanos en el país, y otros documentos que fueron presentados ante organismos internacionales. Los informes especiales elaborados se mencionan a continuación:

En relación a los derechos civiles se elaboraron informes relacionados con la Intervención de las Telecomunicaciones que realiza la Fiscalía General de la República, los registros de desplazamiento forzado interno de personas a causa de la violencia delictiva en El Salvador, y el “Primer informe situacional sobre crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI”.

Asimismo, se elaboraron los siguientes documentos que fueron presentados a organismos internacionales: en agosto de 2016 se contestó cuestionario sobre la situación de la población LGBTI y los Pueblos Originarios de El Salvador, para ser enviado a la Embajada de Estados Unidos de América para la elaboración de su informe anual sobre la situación de derechos humanos; en marzo de 2017 se elaboró matriz con información sobre las condiciones en materia de derechos humanos, Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el proceso de validación de los avances y compromisos de dicho Plan en los temas del cumplimiento por parte de los Estados a la sentencia emitida por la Corte IDH sobre la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, y sobre la Mesa Nacional de atención a víctimas de violencia.

En relación a los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes se elaboró el Informe situacional “Capacidad institucional que el

Estado salvadoreño posee para el combate de las acciones delictivas clasificadas como peores formas de trabajo infantil”; y los siguientes informes especiales: niñez migrante, emitido el 4 de octubre de 2016; informe especial sobre la situación del sistema de justicia penal juvenil, emitido en octubre de 2016 y enviado a la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO); y, en conjunto con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia se elaboró el informe especial sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en niñas adolescentes y mujeres en El Salvador, emitido en julio de 2016.

También se presentaron los siguientes documentos: Informe sobre niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular, emitido en noviembre de 2016; Informe sobre justicia penal juvenil para ser enviado a Naciones Unidas.

Por su parte, en relación a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se realizó la elaboración de tres informes situacionales: el Cuarto Informe sobre el Estado del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador, emitido en agosto de 2016; Capítulo sobre El Salvador para el XIV Informe sobre Derechos Humanos: Pobreza, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), emitido en agosto de 2016; y, el Informe PDDH-OSC para la Lista de Cuestiones 2013-2017, en seguimiento a las Observaciones Finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en conjunto con este Departamento, emitido en febrero de 2017.

Finalmente, en relación a los Derechos vinculados al Medio Ambiente, se elaboró el “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos.

¹³ Artículos 42 y 43 de la Ley de la PDDH y artículo 39 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos.

Cuadro N° 17
Informes especiales y situacionales
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	2
Derechos de las mujeres y familia	1
Derecho a la protección de las personas migrantes y seguridad ciudadana	1
Derechos económicos, sociales y culturales	3
Derechos de la niñez y juventud	4
Derechos vinculados al medio ambiente	1
Total	12

Fuente: Datos proporcionados por la Procuraduría Adjunta, las Procuradurías Adjuntas Específicas

4.1.5. Posicionamientos públicos

El posicionamiento público, es una atribución de la PDDH relacionada a temáticas específicas, situaciones de especial interés para la institución, fechas conmemorativas de los derechos humanos, entre otros.

Durante el período que informa el presente documento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un total de 50 pronunciamientos, referidos a las distintas materias de protección y promoción de los derechos humanos. A continuación el detalle:

Cuadro N° 18
Pronunciamientos por área temática
1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	13
Derechos humanos de la niñez y adolescencia	7
Derechos de las mujeres y la familia	4
Derechos de las personas migrantes y seguridad ciudadana	7
Derechos económicos, sociales y culturales	14
Derechos vinculados al medio ambiente	5
Total	50

Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud (PADNJ) elaboró siete pronunciamientos públicos, entre los que se pueden mencionar: pronunciamiento con relación a los procesos penales iniciados contra supuestos clientes de una red de trata de personas, emitido el 7 de enero de 2017; pronunciamiento ante los lamentables hechos ocurridos en el Centro de Protección de Niñez Institucionalizada denominado “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” ubicado en Guatemala, Ciudad Guatemala, emitido el 11 de marzo de 2017; pronunciamiento ante el cruel asesinato de una infante de siete años de edad y su hermana mayor, la privación de libertad de su hija de dos meses de edad y demás hechos sangrientos relacionados con el caso, emitido el 27 de marzo de 2017, entre otros.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana emitió siete pronunciamientos y comunicados de prensa, los cuales son: pronunciamiento sobre la aplicación de las medidas extraordinarias en siete centros penitenciarios del país, emitido en agosto de 2016; pronunciamiento ante los hechos de violencia ocurridos el seis de octubre de dos mil dieciséis en diversos municipios del país, emitido en octubre de 2016; comunicado en el que se hizo pública la propuesta del “Plan para la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y el “Programa de asistencia para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han muerto en el ejercicio de sus labores o en otros hechos violentos”, emitido en noviembre de 2016; pronunciamiento con ocasión del Día Internacional de la Persona Migrante, emitido en diciembre de 2016; comunicado en el cual se lamenta la muerte de agente de la Policía Nacional Civil en San Martín, emitido en enero de 2017; comunicado sobre verificación del proceso de recepción de personas migrantes en el Centro de Atención a Retornados de la Dirección General de Migración y Extranjería, emitido en febrero de 2017.

La Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles emitió 13 posicionamientos, pronunciamientos y

comunicados de prensa, entre los que se puede mencionar el Posicionamiento en el marco del Día del Defensor y la Defensora de Derechos Humanos, emitido el 26 de septiembre de 2016; el Posicionamiento en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, con fecha 24 de marzo de 2017; Pronunciamento en el marco del día internacional contra la tortura, de fecha 26 de junio de 2016; Pronunciamento en el marco de la conmemoración del día del orgullo LGBTI, emitido el 28 de junio de 2016; Comunicado de Prensa sobre la presentación del Informe de Registros de la PDDH sobre Desplazamiento Forzado, de fecha 8 de agosto de 2016; Comunicado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de fecha 5 de septiembre de 2016; Comunicado con motivo del día de la resistencia indígena, de fecha 12 de octubre de 2016; Comunicado con motivo de la conmemoración del 85° aniversario del genocidio-etnocidio de 1932, con fecha 22 de enero de 2017; Pronunciamento respecto a los recientes homicidios de los que han sido víctimas mujeres trans integrantes de la población LGBTI de El Salvador, emitido el 23 de febrero de 2017; Pronunciamento ante los desplazamientos forzados en el municipio de Caluco, Departamento de Sonsonate, emitido el 3 de octubre de 2016; Comunicado de Prensa sobre la expo/foto: Detenido desaparecido en el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, del 30 de agosto de 2016; Comunicado sobre la reapertura de la oficina de enlace y verificación de los derechos humanos en el ex bolsón de Nahuaterique, emitido el 9 de diciembre de 2016.

Por su parte, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró catorce pronunciamientos entre los que se encuentran: Pronunciamento ante la reducción y suspensión de labores en diferentes Centros del Sistema Público de Salud, emitido el 14 de octubre de 2016; Segundo pronunciamento ante la reducción de labores en diferentes centros del Sistema de Salud y la falta de acuerdos entre las autoridades del Ministerio de Salud y los sindicatos del sector, emitido el

20 de octubre de 2016; Pronunciamento ante cierres de carreteras impulsados por distintas Alcaldías del país, en protesta por el retraso en la transferencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), emitido el 7 de noviembre de 2016, entre otros.

Finalmente, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente ha participado en la elaboración de pronunciamientos relacionados con el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (CIADI) que resolvió a favor de El Salvador el litigio iniciado por la empresa Pacific Rim y continuado por la empresa minera de capital australiano Oceana Gold por la negativa del Estado de otorgar permisos de explotación minera metálica en el departamento de Cabañas. Además se emitieron dos comunicados referentes al derecho humano de acceso al agua, uno de los cuales se realizó el Día Mundial del Agua; asimismo se realizó un posicionamiento institucional en apoyo a las consulta pública realizada en el municipio de Cinquera, departamento de Cabañas, por medio del cual se pedía a la ciudadanía de esa localidad pronunciarse sobre los proyectos de minería metálica en esa jurisdicción, verificándose en los resultados un contundente rechazo a dichas actividades extractivas. Por otro lado se impulsó un pronunciamiento sobre el proceso de aprobación de una ley que prohíba ese tipo de minería en nuestro territorio, en consonancia con la posición que ha venido sosteniendo esta Institución sobre el tema desde años atrás.

4.1.6. Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma

La normativa institucional faculta la emisión de opiniones sobre normativas o políticas públicas, a fin de promover y proponer las medidas que estime necesarias para prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el pleno goce de los mismos”.¹⁴

14 Arts. 83-86 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos.

En el presente período se emitieron un total de 16 documentos relacionados con normativas específicas, entre las que destacan las opiniones institucionales que promueven la incorporación de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación nacional y aquellas vinculadas a la regulación de problemáticas que afectan la promoción y protección de los mismos.

El criterio de la PDDH, en los procesos de formulación de leyes, contribuye al conocimiento y la admisión de la perspectiva de los derechos humanos en la normativa nacional, avanzando paulatinamente en la armonización con la base jurídica de los derechos humanos.

Cuadro N° 19 Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley por área temática 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017	
Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	5
Derechos de las mujeres y la familia	2
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud	5
Derechos de las personas migrantes y seguridad ciudadana	2
Derechos económicos, sociales y culturales	2
Total	16

Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud elaboró el pronunciamiento con motivo del Día internacional de los derechos de las niñas en el marco del 27 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, emitido el 12 de octubre de 2016. Además, se emitieron cuatro

opiniones sobre anteproyectos de leyes: Ley Especial de Adopciones, reformas a la Ley Penal Juvenil, y a dos anteproyectos de la Ley sobre retiro, readaptación y reinserción de miembros de maras y pandillas.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana elaboró una opinión sobre las reformas propuestas a la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes y sus Familias dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, emitida en mayo de 2017. En cuanto al posicionamiento sobre normativas, esta adjunta elaboró insumos para el séptimo informe de derechos humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores en septiembre de 2017.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles elaboró las siguientes opiniones de proyectos de ley: opinión sobre la ratificación del Acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, elaborada el 26 de junio de 2016; la Opinión sobre la iniciativa de emitir la Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado, en fecha 27 de enero de 2017; la Opinión sobre la ratificación del Tratado de Extradición suscrito entre la República de El Salvador y la República de Argentina, con fecha 5 de abril de 2017; Opinión sobre la ratificación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte, en fecha 5 de abril de 2017; y, Opinión ilustrativa sobre la adopción por el Estado salvadoreño del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Cruelles, Inhumanas y Degradantes, con fecha 22 de junio de 2016.

Por su parte, la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió, a solicitud de la

Asamblea Legislativa, opinión a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda sobre la propuesta de reforma al artículo 6 de la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, emitido en marzo de 2017; Opinión sobre propuesta de conformación del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis en El Salvador, emitida en marzo de 2017.

4.1.7. Actividades de observación preventiva y atención de crisis

Durante el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó a nivel nacional un total de 1,682 acciones de protección relacionadas con la observación preventiva, diligencias de buenos oficios y mediaciones.

Cuadro N° 20 Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis 1 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017				
Unidad	Observación preventiva	Buenos oficios	Mediaciones	Total
San Salvador	240	396	866	1502
La Libertad	15	6	11	32
Usulután	6	1	0	7
Cuscatlán	8	15	1	24
Ahuachapán	11	18	8	37
San Miguel	19	0	5	24
Santa Ana	9	1	4	14
La Paz	2	0	0	2
San Vicente	0	0	1	1
Morazán	2	5	0	7
Chalatenango	3	0	6	9
La Unión	1	1	1	3
Cabañas	5	3	4	12
Sonsonate	2	4	2	8
Total	323	450	909	1682

Fuente: Reportes de las Delegaciones Departamentales PDDH y DOPAC

i. Observación preventiva y atención de crisis

La observación preventiva y atención de crisis es un mecanismo de protección que tiene por objeto la vigilancia o seguimiento de hechos, situaciones, condiciones o contextos que podrían generar violaciones de derechos humanos a nivel local, regional o nacional; sean éstos económicos-sociales, penitenciarios, ambientales o de otra naturaleza, que puedan desembocar en vulneraciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,

entre ellas, movilizaciones, protestas y concentraciones colectivas en lugares públicos o privados; amotinamientos o riñas en centros de detención, toma de edificios públicos o privados, y crisis derivadas de la confrontación o conflictos surgidos entre colectividades y autoridades públicas.¹⁵

Según lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos la observación

¹⁵ Arts. 41 y 43 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos

preventiva y atención de crisis comprende la aplicación técnica de los diferentes métodos alternos de solución de conflictos, tales como el diálogo, la negociación, la conciliación y la mediación, desde la estricta perspectiva de los derechos humanos y del mandato constitucional y legal del Procurador o Procuradora; promoviéndose en todo momento, la prevención o solución de las diferentes problemáticas atendidas.¹⁶

En el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó 323 diligencias relacionadas con la observación preventiva.

ii. Interposición de buenos oficios

Los buenos oficios son las gestiones que el Procurador o Procuradora, quien realice sus funciones, o quien tuviere delegación para ello, realizan a petición de la presunta víctima o denunciante con la anuencia de aquella, ante la autoridad denunciada o competente, con el objetivo de restituir o reparar integralmente y de manera inmediata los derechos presuntamente afectados. La interposición de buenos oficios es procedente siempre que la gestión no implique un menoscabo a otros derechos de la presunta víctima o de otras personas afectadas. Durante el período que corresponde al presente informe, esta Procuraduría realizó un total de 450 diligencias de buenos oficios ante distintas autoridades públicas.

iii. Mediaciones

El Reglamento para la Aplicación de Procedimientos establece que la mediación es un mecanismo potestativo que tiene como objetivo buscar la solución negociada de un conflicto, generalmente de naturaleza colectiva. La mediación es especialmente impulsada por la Procuraduría para facilitar la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, quienes deciden y proponen las condiciones para resolverlo (Art. 16 lit. c).

Es por ello que la labor de mediación representa para la PDDH una actividad de primer orden, en

el marco de su interés por propiciar el ejercicio del diálogo y las soluciones democráticas en el país. En ese sentido, entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de abril de 2017, esta Procuraduría realizó un total de 909 mediaciones a nivel nacional.

4.2

Promoción de los derechos humanos

Con arreglo a los Principios de París, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la obligación y función básica de divulgar la información y conocimientos sobre los derechos humanos hacia el público en general y hacia determinados grupos de su interés.¹⁷ Esta facultad tiene como base el reconocimiento del derecho y deber de todas las personas de individual o colectivamente: conocer, recibir, publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.¹⁸

En el caso de la PDDH, la promoción de los derechos humanos está regulada en diferentes instrumentos jurídicos que contemplan las diversas acciones que pueden ser realizadas en el cumplimiento de dicha atribución. En primer lugar, la Constitución de la República establece en su artículo 194, una serie de facultades relacionadas con la promoción de los derechos humanos, a saber: a) promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos; b) emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos; c) promover las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a derechos humanos y d) desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

¹⁷ Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales. Anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

¹⁸ Asamblea General, Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, Resolución aprobada el 8 de marzo de 1999, en el 53º período de sesiones, Nueva York, artículo 2º.

¹⁶ Art. 46 del Reglamento.

Por otro lado, el artículo 2 de la Ley de la PDDH establece que el objeto de su creación ha sido la protección, promoción y educación en derechos humanos, agregando el artículo 12 la facultad de promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos, además de crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y con los diversos sectores de la vida nacional.

La Escuela de Derechos Humanos (EDDH) es la dependencia encargada de elaborar el Plan Anual de Promoción en Derechos Humanos, en coordinación con las diferentes Procuradurías Adjuntas, Delegaciones Departamentales y otras dependencias. El artículo 3 del Reglamento de la EDDH la reconoce como la instancia institucional especializada que tendrá como fin promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos, se encuentra formada por cuatro departamentos: Educación, Promoción y Cultura, Realidad Nacional y Biblioteca Institucional. Cada una de estas dependencias desarrolla actividades de promoción de los derechos humanos, mediante procesos de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico, la difusión de los derechos humanos a través de actividades académico-culturales, publicaciones especializadas, la disponibilidad de acervo bibliográfico u otras actividades complementarias.

También existen otras dependencias que, de acuerdo a sus funciones, realizan actividades de promoción, tales como: las Procuradurías Adjuntas Específicas, las Delegaciones Departamentales y otras instancias especializadas como las Unidades Juveniles. Además, algunas dependencias administrativas apoyan la realización de actividades de promoción, como son: el Departamento de Recursos Humanos, que tiene como función elaborar y mantener actualizado el Plan de Capacitación de la Institución, en coordinación con la EDDH; el Departamento de Comunicaciones, que tiene como una de sus principales atribuciones: diseñar, ejecutar y mantener en constante

actualización un sistema de comunicación interno y externo que permita proyectar las actividades institucionales; y el Departamento de Tecnologías de la Información que mantiene en funcionamiento los sistemas de comunicación digital internos y externos que se requieren para el cumplimiento de las funciones institucionales, además da mantenimiento oportuno a la página web institucional.

Durante esta gestión, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, continuó con el Plan Estratégico para la Promoción de los Derechos Humanos (PEPDH) con el objetivo de contribuir a la prevención de violaciones a los derechos humanos, favoreciendo la creación de una cultura de respeto y garantía de los mismos a través de las actividades de educación, difusión e investigación relacionadas con las normas y estándares de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los diferentes mecanismos de protección a nivel nacional e internacional.

El PEPDH tiene como base el eje segundo del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, referido a la promoción de los derechos humanos. En ese sentido, retoma como objetivo estratégico: “Desarrollar un Sistema de Promoción de Derechos Humanos, dirigido a la población víctima, grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad, instituciones de la administración pública y ciudadanía en general, a fin de contribuir a la prevención de vulneraciones y la generación de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos”. En ese sentido la creación y fortalecimiento del Sistema de Promoción de Derechos Humanos, ha iniciado su recorrido a través de la Ruta Metodológica (aprobada recientemente por la señora Procuradora), la cual ha permitido contar con un planteamiento técnico que indica las condiciones, la organización y las fases por las cuales deberá transitarse para la construcción de sus componentes esenciales.

Actualmente se desarrolla su primera fase, que consiste en el diseño y realización de un diagnóstico que identifique el estado de la situación de la promoción de los derechos

humanos. Lo anterior posibilitará determinar las diferentes normativas, políticas, programas, proyectos, buenas prácticas y lecciones aprendidas, entre otros aspectos, que desde la creación de la PDDH se han venido realizando en esta materia.

En esa lógica se ha creado una Comisión de Metodología, integrada por un representante de los departamentos adscritos a la Escuela de Derechos Humanos y los Delegados departamentales de Sonsonate y La Paz; la cual garantiza el desarrollo de propuestas, la facilitación de las reuniones o talleres de trabajo y la integración de las observaciones que aportan todos los participantes. Ésta, funciona bajo la conducción y supervisión de la Dirección de la EDDH.

Por otra parte y en cuanto a las acciones institucionales de promoción de los derechos humanos, se han realizado diferentes actividades, que han contribuido al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos

mediante procesos de educación, difusión y sensibilización destinados a las víctimas, mujeres y sectores sociales en condición de vulnerabilidad, instituciones de la administración pública y sociedad en general.

Durante el período a informar, el total de actividades de promoción de los derechos humanos realizadas por la PDDH a nivel nacional asciende a 1,347 con las cuales se ha beneficiado de manera directa a más de 43,168 personas, entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Las acciones de promoción, como se detallará posteriormente, y según los registros institucionales se realizan principalmente en los territorios de las Delegaciones Departamentales (870); seguidas de las actividades que se realizan desde la Escuela de Derechos Humanos y demás áreas especializadas de la Sede Central (437); así como por las Procuradurías Adjuntas específicas (40).

Cuadro N° 21
Resumen de Actividades de Promoción realizadas a nivel nacional y
personas beneficiadas durante
el periodo comprendido del 01 de junio de 2016 al 30 de abril de 2017

Dependencia	Cantidad de Materiales	Número Actividades	Personas Beneficiadas		
			Mujeres	Hombres	Total de personas
Delegaciones Departamentales	11,800	870	15,176	15,718	30,894
Sede Central y Deptos. Especializados	20,837	437	4,615	5554	10,169
Procuradurías Adjuntas	1,114	40	1,241	864	2,105
Total	33,751	1,347	2,1032	22,136	43,168

Fuente: Reporte de actividades por dependencia PDDH

En ese sentido las actividades referidas han sido orientadas a diversos sectores o grupos sociales, entre los que se incluyen: a) Sector educativo-formal: comprende estudiantes del nivel de educación básica, media y superior; b) Mujeres; c) Grupos en condición de vulnerabilidad,

particularmente: personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, pueblos indígenas, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas migrantes, etc.; d) Organizaciones sociales, incluyendo sindicatos, Organizaciones No Gubernamentales

(ONG), gremios, comunidades, colectivos y movimientos; y e) Otros, entre los que se encuentran Escuelas de madres y padres de familia, actividades relacionadas con los medios de comunicación y sociedad civil, entre otros.

Además, durante el periodo se entregaron 33,751 ejemplares de material impreso, digital y audiovisual, que incluyen libros, cuadernillos, informes, trípticos, afiches u otro tipo de publicación atinente a los derechos humanos; así como entrevistas, notas para canal de youtube, spots, cuñas radiales y programa de TV; el cual se utiliza como material de apoyo y difusión para el desarrollo de cursos de formación, foros, seminarios, conversatorios, divulgación de informes, ferias, festivales, celebración de días conmemorativos, actividades de difusión del mandato de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y participación en medios de comunicación social; de los cuales 20,837 fueron entregados por la Escuela de Derechos Humanos y departamentos especializados; seguido de 11,800 en las Delegaciones Departamentales y 1,114 de las Procuradurías Adjuntas.

De igual forma, en la práctica formativa se ha difundido y socializado el quehacer de esta Procuraduría que se materializa en muchos casos en resoluciones, informes especiales y otros documentos como opiniones ilustrativas relacionadas a proyectos de leyes o promoción de adhesiones a instrumentos internacionales de derechos humanos.

a) Delegaciones departamentales

Las actividades de promoción llevadas a cabo por las Delegaciones Departamentales se enfocan mayormente a divulgar el mandato constitucional y legal de la PDDH, así como a la realización de conversatorios, ferias, reuniones de seguimiento y participación en los medios de comunicación social; en donde se abordan temas más específicos sobre Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Abuso y Acoso Sexual, Niñez Migrante, Violencia y Género, Trata de Personas, Derechos Sexuales y Reproductivos, Migración y Juventud, Derechos

y Deberes según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Derechos de las personas con discapacidad, Justicia restaurativa y procedimientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, etc.

Estas favorecen específicamente al sector educativo formal, mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad y sociedad civil; en el caso de los servidores públicos se trabajó especialmente con personal de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Centros Penales, docentes, entre otros.

Las delegaciones departamentales también han realizado durante el período esfuerzos para la promoción de los derechos humanos en coordinación con las Procuradurías Adjuntas específicas, Departamentos o Unidades especializadas de la PDDH, instituciones públicas y organizaciones sociales, con el fin de brindar asesoría y dar apoyo técnico y material a personas usuarias. Además como en años anteriores, es importante destacar la labor de apoyo del Departamento de Unidades Juveniles en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, migración irregular y la plataforma de derechos de la juventud.

b) Escuela de Derechos Humanos y Sede Central San Salvador

La Escuela de Derechos Humanos en materia de promoción desempeña un rol fundamental por ser la instancia institucional especializada de la PDDH en promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos, desde cada una de sus dependencias desarrolla actividades de promoción de los derechos humanos, mediante procesos de educación, capacitación, investigación, asesoramiento técnico y difusión de los mismos a través de actividades académico-culturales, publicaciones especializadas, la disponibilidad de bibliografía u otras actividades complementarias.

Desde la Dirección de la Escuela de Derechos Humanos se ha contribuido a la conducción estratégica de esta instancia, con el apoyo de las jefaturas y los equipos técnicos de los

Departamentos que la conforman; a partir del Plan Estratégico para la Promoción de los Derechos Humanos de la PDDH ha coordinado y gestionado el apoyo de las distintas dependencias de la institución que realizan funciones de promoción.

Por otra parte, existen otras dependencias que, de acuerdo a sus funciones, realizan actividades de promoción, tales como: las Procuradurías Adjuntas Específicas, las Delegaciones Departamentales y otras instancias especializadas como las Unidades Juveniles, la Unidad de Atención Especializada a las Mujeres Víctimas de Violencia, Unidad de Género Institucional, Departamento de Atención a la Persona Migrante, el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, el Departamento de VIH y Derechos Humanos, el Departamento de Comunicaciones y el Departamento de Derechos Políticos, entre otros.

▪ *Departamento de Educación*

Tiene como objetivo general educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los derechos humanos, con el fin de que la población se apropie de ellos con miras a generar una cultura de respeto y garantía en el Estado. El desarrollo de las actividades educativas en derechos humanos comprende la realización de cursos, talleres, seminarios, conferencias y jornadas educativas en el abordaje de diferentes temáticas, en correspondencia con la política de educación en derechos humanos de la PDDH, delimitada en el Plan Estratégico de Promoción de los Derechos Humanos.

En el período a informar el Departamento ha desarrollado tres programas de educación en derechos humanos, los cuales han sido dirigidos a la ciudadanía, en especial a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad; funcionariado público, desde la estrategia de agentes multiplicadores y la capacitación para el personal de la institución. Se trata de procesos formativos que tienen como finalidad fortalecer los conocimientos en derechos humanos, así como prevenir las vulneraciones de los mismos.

Además se ha impartido dos diplomados relacionados con el derecho humano a la salud de las personas con discapacidad; el primero denominado “Derechos Humanos y Discapacidad Psicosocial- Mental”, coordinado con la Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia y otras Discapacidades Mentales. (ASFAE), dirigido a profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos/as, trabajadores sociales, enfermeros/as, empleados o funcionarios que inciden o brindan servicios a esta población. El segundo, llamado “Diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad, Participación Ciudadana y humanización”; el cual fue orientado a profesionales del Ministerio de Salud de la zona metropolitana. En ambos cursos el objetivo primordial fue sensibilizar y enseñar las nociones básicas sobre la doctrina de los Derechos Humanos, identificar los mecanismos de tutela del derecho humano a la salud en los Sistemas de Protección, desarrollar la protección del derecho a la salud de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y promover el mandato de la institución en su labor en la protección de este derecho.

De la misma forma se continuaron impartiendo mensualmente los cursos básicos de derechos humanos y cursos especializados; éstos últimos de acuerdo a las temáticas relacionadas con fechas conmemorativas de derechos humanos como mujeres, medio ambiente, personas con VIH, migrantes, poblaciones indígenas, memoria histórica, niñez y derechos de las personas LGTBI, los cuales se dirigen a la ciudadanía de forma gratuita y buscan empoderar a todas las personas participantes en el conocimiento y exigencia de sus derechos humanos.

En lo referente a las capacitaciones al funcionariado público, se ha impartido un Curso de derechos humanos y función policial dirigido al personal de la Inspectoría General de Seguridad Pública a nivel nacional. En dicho curso, los contenidos desarrollados se relacionaron con los derechos mas vulnerados por parte de la Policía Nacional Civil según los registros de la PDDH, esto con la finalidad de incidir en la prevención de futuras violaciones

a derechos humanos; los temas especializados fueron impartidos por personal de las áreas específicas de protección que trabajan en la investigación de los casos.

Por otra parte, el programa de formación dirigido al Personal de la PDDH, cuenta con dos modalidades: a) el “Curso Básico de Inducción en Derechos Humanos” para el personal de nuevo ingreso en la Institución b) “Curso Regional de Derechos Humanos” dirigido al personal de las Delegaciones Departamentales, el cual tiene como objetivo fortalecer y unificar el enfoque de derechos humanos desde las prácticas diarias del mandato constitucional; en especial, identificar y rescatar las buenas prácticas en materia de promoción y protección para desarrollar áreas de enseñanza que permitan la integralidad en las funciones que se realizan tanto en las delegaciones departamentales como la sede central.

▪ *Departamento de Cultura y Promoción*

La finalidad de este departamento es efectuar actividades de difusión y sensibilización en derechos humanos, en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la Escuela de Derechos Humanos, las cuales son: a) elaborar el plan de trabajo de la Unidad y someterlo a aprobación de la Dirección; b) formular programas y ejecutar actividades de promoción y cultura que comprendan promover el mandato de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos; c) organizar foros, seminarios y jornadas de interés para la Procuraduría y el país en las áreas conexas con los derechos humanos; d) apoyar las actividades académicas culturales de las Delegaciones Departamentales y Locales; e) organizar y dirigir la implementación de planes y programas de la unidad aprobados por la Dirección de la Escuela y el Titular; f) supervisar las diferentes actividades realizadas por la unidad; g) colaborar con la Dirección de la Escuela en la coordinación de actividades con instituciones o entidades públicas y privadas para la realización de actividades de promoción y cultura en derechos humanos; h) dirigir y coordinar actividades de promoción

que coadyuven a una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; i) diseñar, elaborar y distribuir materiales de promoción de los derechos humanos.

En el período correspondiente al presente informe y en cumplimiento del objetivo “fortalecer y posicionar los derechos humanos ante comunidades, servidores públicos, organizaciones sociales y personas que pueden incidir en su vigencia”, el departamento desarrolló tres programas: a) Campaña de difusión y sensibilización en derechos humanos, b) Material de difusión y sensibilización en derechos humanos, y c) Programa de conmemoración de fechas relacionadas con los derechos humanos; realizando un total de 81 acciones de difusión e información, beneficiando directamente con dichas labores a más de 3,401 personas, entre las cuales se incluye a niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres.

Se ha enfatizado en las acciones de difusión el mandato de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos; para lo cual se llevaron a cabo 58 jornadas realizadas en Complejos Educativos, Institutos Nacionales, Inspectoría General de Seguridad Pública, sede Santa Tecla, La Libertad, Universidad de El Salvador sede central, región oriente, región occidente y región paracentral, Casa de la Cultura y sede del Instituto Nacional de la Juventud – INJUVE, Fuerza Armada de El Salvador (Centro de Historia Militar –Estado Mayor Conjunto –Comando de Fuerzas Especiales). En estas actividades se logró atender a una población de 3,231 personas entre las que se encuentran jóvenes estudiantes de educación básica, media y superior, docentes, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Fuerza Armada de El Salvador; entre esta cantidad de personas se encuentran 1,726 mujeres y 1,505 hombres.

Así también, en el mismo programa se realizaron 11 ferias de derechos humanos con temáticas como la promoción y difusión de los derechos humanos de la niñez, el derecho a la salud de las mujeres, los derechos humanos de la comunidad universitaria, los derechos humanos en el ámbito laboral de las personas migrantes

centroamericanas, entre otros y estimando la participación de 1,600 personas.

Además se han organizado durante el período de este Informe, 11 actividades conmemorativas de difusión y recuperación de la memoria histórica a través del Ciclo de Cine Fórum sobre Derechos Humanos, modalidad que se utiliza como recurso didáctico para ofrecer conocimientos y estimular el interés por los derechos humanos y la proyección de las películas o documentales se realizaron en las aulas de la Escuela de Derechos Humanos ; en estas actividades el total de las personas participantes fue de 170, entre las que se encuentran y 91 mujeres y 79 hombres.

En materia de diseño, elaboración y distribución de material de difusión de los derechos humanos; durante el período se registraron 108 materiales que han sido rediseñados, editados o reproducidos, beneficiando a hombres y mujeres que participan en actividades educativas y de sensibilización de derechos humanos; así tenemos: un afiche, 5 banner, 12 trípticos, 14 brochure, 14 carteleras, 6 cuadernillos, 2 dispositivas, 6 folletos, 2 hojas de trabajo, 46 hojas volantes, un logo promocional, 6 presentaciones en PowerPoint y 7 tarjetas.

▪ *Biblioteca Institucional*

En el periodo a informar esta dependencia recibió 1,500 donaciones de material bibliográfico, lo que permitió tener mayor disponibilidad de recursos y ofrecer un mejor servicio en cuanto al préstamo del material; el cual ascendió a 109 solicitudes internas, 590 externas y 3 interbibliotecarias; lo que permitió atender a 699 personas. De estas, 120 son estudiantes universitarios y 207 estudiantes de centros escolares; 10 profesionales de las diferentes disciplinas, 109 personas de la institución, 88 investigadores y 181 personas de otros sectores.

Al mismo tiempo, realizó 2 celebraciones de días conmemorativos, 3 ferias, cursos y talleres, beneficiando a 220 mujeres y 489 hombres; además de distribuir material educativo,

de difusión, gráfico, audiovisual e informes institucionales; haciendo un total de 1,500 materiales entregados para la difusión en derechos humanos.

▪ *Departamento de la Realidad Nacional*

Durante el presente período este departamento elaboró documentos de análisis, sistematización de las actividades institucionales y otras acciones en materia de derechos humanos, los cuales fueron presentados a la Dirección de la Escuela de Derechos Humanos para su aprobación. Entre ellos destacan: el Informe Anual de Labores 2015-2016; elaboración de matriz para la construcción del perfil de proyecto del Observatorio de Derechos Humanos; colaboración en la elaboración del Informe sobre Medidas Extraordinarias en materia de Seguridad, entre otros.

Además generó aportes técnicos en pronunciamientos e informes requeridos por la Dirección y el Despacho de la señora Procuradora; tales como: Propuesta para la elaboración del pronunciamiento sobre el XXV Aniversario de la masacre de El Mozote y lugares aledaños; se redactó el Informe sobre los Acuerdos de Paz; así como el documento sobre el "Estado de los Derechos Humanos 2016"; asimismo a solicitud de la PADMF se elaboró el documento de Contribución especial de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos presentada al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en ocasión del Examen de los Informes Periódicos Octavo y Noveno combinados de El Salvador.

En ese mismo sentido, se colaboró en la redacción de proyectos de revisión a la resolución de la Masacre el Mozote y lugares aledaños emitida por esta Procuraduría, interpuestas por el personal fiscal involucrado; además de elaborar opiniones sobre el Proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado y la despenalización del aborto.

Por otro lado en cuanto a la labor de promoción, este departamento ha realizado esfuerzos concernientes a elaborar propuesta de contenido y metodología, así como la preparación del material a exponer y facilitación de las jornadas para abordar los distintos temas contenidos en el “Curso Básico de Derechos Humanos dirigido al personal de las Delegaciones Departamentales” impartido por la Escuela de Derechos Humanos. Además en cuanto al Proyecto de Ferias Conmemorativas, se ha elaborado una propuesta metodológica para la sistematización de la información relacionada con las actividades de promoción de cara a los 25 años de la PDDH; para lo cual se realizó un análisis sobre la evolución del trabajo realizado por la institución.

De igual forma se colaboró con otras aéreas, tanto de la Escuela de Derechos Humanos, Departamentos Especializados, Procuradurías Adjuntas específicas y el despacho de la señora Procuradora; realizando acciones de apoyo técnico en temas de Promoción, Derecho a la Verdad y Memoria Histórica, Tema electoral, inducción al personal de nuevo ingreso, entre otros.

Asimismo se reportan participaciones en otros espacios, tales como en la Jornada de fortalecimiento de capacidades para la investigación de violaciones al derecho a la vida; Taller denominado “La búsqueda de justicia y verdad, un paso para garantizar la no repetición” organizado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); participación en curso de formación sobre Derechos Laborales de Mujeres; participación en el Primer Concurso Interuniversitario de Derechos Humanos, realizado en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel entre otros.

▪ *Departamento de Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos*

Las Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos en la PDDH, han continuado su trabajo permanente iniciado en el año 2002, a pesar

del creciente ambiente hostil hacia las personas adolescentes y jóvenes que prevalece en nuestro país, producto de la situación de inseguridad. El modelo de las Unidades Juveniles se destaca a nivel de América Latina y ya fue reconocido en 2010 por el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Durante el año 2016 se continuó con el funcionamiento normal de 16 Unidades Juveniles, cubriendo los 14 departamentos del país, con la participación de un promedio de 200 adolescentes y personas jóvenes voluntarias de todo el país. Los principales resultados se obtuvieron por medio del desarrollo de proyectos dirigidos desde la coordinación del departamento, entre los cuales se menciona la realización del Encuentro Nacional de Unidades Juveniles de cierre del año (diciembre de 2016), con la presencia de 90 adolescentes y jóvenes representantes de todo el país.

Asimismo es importante destacar que esta dependencia desarrolló cursos tales como: a) “Curso Básicos de Derechos Humanos en el entorno de la Salud Integral Sexual y Reproductiva, los Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia” para adolescentes y jóvenes líderes, provenientes de Centros Educativos y/o Centros de Salud, en los municipios priorizados por el Ministerio de Salud, con alto índice de embarazos adolescentes, en los departamentos de La Libertad y San Salvador; b) Curso “Liderazgo y Derechos Humanos” para jóvenes de Unidades Juveniles de la zona Para Central del país, incluyendo a Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente; c) Curso sobre Derechos y demandas de Juventudes para jóvenes de Unidades Juveniles, que fueron formados en liderazgo con visión de derechos humanos y el auto cuidado de la salud mental.

En ese mismo sentido se llevaron a cabo los “Talleres regionales de formación en Contraloría Social, Veeduría Ciudadana e Incidencia a los servicios Amigables para A&J” para jóvenes de las Unidades Juveniles de Usulután, San Vicente, San Salvador, La Libertad y Sonsonate, con el patrocinio del UNFPA y facilitación de personal técnico de esa agencia de las Naciones Unidas

y se continuó participando en la coordinación y desarrollo del proyecto de “Incidencia con Base en Evidencias” conjuntamente con el Ministerio de Salud y Redes Juveniles, con el objetivo de crear una contraloría social, que encamine a un nuevo proceso de coparticipación para beneficiar a la población, en específico en lo que respecta a los servicios de salud sexual y reproductiva, enfocados a las personas jóvenes.

Por otra parte, se distribuyeron materiales de difusión y sensibilización en derechos humanos en 38 actividades, de acuerdo al carácter de cada una, tales como: Brochures sobre Salud Sexual y Reproductiva, Plataforma de la Niñez, Adolescencia y Juventudes 2014-2019, Historietas sobre Juventud y Migración, el libro: “Dale, Guía de Sensibilización y capacitación en Salud de la Persona Adolescente y joven, Derechos Humanos, Género, Prevención de la Violencia y Migración” y otras haciendo un total de 8,650 materiales entregados.

▪ *Departamento de Derechos Políticos*

Las principales actividades de promoción de derechos humanos reportadas por este departamento enfocan sus esfuerzos en torno a: 1) participación en foro organizado por la Oficina Legislativa del Departamento de Cabañas, con el tema sobre “la Constitución y Derechos Políticos”; 2) Jornadas de formación en derechos políticos, dirigidas a mujeres Alcaldesas, Síndicas y Regidoras que pertenecen a ANDRYSAS, de las zonas paracentral, occidental y oriental y 3) participación en jornadas de fortalecimiento de capacidades del personal jurídico de las delegaciones departamentales de la PDDH.

▪ *Departamento de Comunicaciones y Prensa*

Durante el presente periodo se realizaron diferentes acciones de promoción, entre las cuales destacan entrevistas en medios de comunicación, conferencias de prensa, programas de TV, notas para canal institucional de “YouTube”; publicaciones, boletines y elaboración de spots y cuñas radiales; envío de información en audio y vídeo a los medios de

comunicación que solicitan material, así como la ampliación de la red permanente de difusión de las actividades de la PDDH a través de corresponsales de prensa en el interior del país.

Así también se continúa utilizando las redes sociales, permitiendo llevar nuestro mensaje a diferentes públicos que nos visitan a través de Twitter, Facebook y YouTube; facilitando el acceso de las personas usuarias a la información institucional.

▪ *Unidad de Atención Especializada a las Mujeres Víctimas de Violencia*

Respecto a las acciones reportadas por esta Unidad, se puede mencionar la divulgación y formación en relación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de 3 jornadas educativas, 4 entrevistas radiales como televisivas, dirigidas a Instituciones del Estado tales como, Centro Nacional de Registros y Ministerio de Hacienda bajo los temas de Violencia hacia las Mujeres en el marco Jurídico de la LEIV, su enfoque victimológico, charlas de atención en crisis, primeros auxilios psicológicos, y descontruyendo el amor romántico; Funciones de la Unidad de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia, logrando con ello el empoderamiento de las Mujeres con el fin de que no se continúe vulnerando el derecho a una Vida Libre de Violencia, establecido en el artículo 1 de la LEIV.

Dichas capacitaciones fueron dirigidas a un total de 98 mujeres entre el rango de las edades de 25 a 60 años y a 23 hombres entre el rango de las edades de 28 a 65 años, con cargos de jefaturas y técnicos, todo esto como cumplimiento al Plan Operativo de esta Unidad comprendido en el período dos mil dieciséis y dos mil diecisiete.

▪ *Unidad de Género Institucional*

Entre las principales actividades de promoción llevadas a cabo por esta Unidad, destacan las gestiones de articulación y coordinación con el ente rector de la Política Nacional de la Mujer ISDEMU estableciendo una serie de reuniones con la Escuela de Formación para la Igualdad

Sustantiva, con el fin de que asigne personal de su institución para impartir cursos especializados como el ABC del enfoque de género en formato presencial en las instalaciones de la PDDH. Es así como se logra contar con un proceso de capacitación continuo el cual se lleva a cabo desde marzo de 2017 para finalizar en junio del mismo año.

▪ **Departamento de la Persona Adulta Mayor y Derechos Humanos**

Con respecto a la difusión de los derechos humanos, este Departamento participó en los siguientes talleres: a) Taller Conceptual para el desarrollo del Diplomado en Atención Geriátrica, donde se abordaron las temáticas sobre un estudio de las discapacidades en El Salvador y la Geriatriización de la Medicina de los Adultos Mayores; b) Taller sobre Política Nacional de Cuido del personal de Enfermería en atención a Personas Adultas Mayores; c) Taller Centroamericano sobre la incidencia y ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y d) Taller sobre el Día Internacional de la Mujer” CAIPSFA.

Además brindo capacitaciones dirigidas a diferentes sectores tales como 1) Grupo de Personas Adultas Mayores de INPEP; 2) Personal médico del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS; 3) Personas Adultas Mayores del Programa a Pensionados de la Ciudadela Monserrat del ISSS; y 4) Personas Adultas Mayores de la Asociación Tecleña

Sumado a lo anterior, brindó 2 entrevistas a medios de comunicación sobre los derechos de las personas adultas mayores; así también se participó en foros, conversatorios y eventos conmemorativos, tales como “Día de la No violencia Contra las Personas Adultas Mayores”; celebración del primer año de la firma de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas

Adultas Mayores” y “Conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad”.

Finalmente es importante mencionar que se elaboraron 2,500 trípticos referente a los derechos humanos de las personas adultas mayores, denominado “Los años no quitan derechos ¡Las Personas Mayores los tienen y la PDDH los defiende!”, los cuales se están distribuyendo en actividades de difusión de este Departamento, como también en aquellos bajo la coordinación de la Escuela de Derechos Humanos y Delegaciones Departamentales.

▪ **Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos**

Respecto a las actividades de promoción llevadas a cabo por este departamento se destaca la “Actividad Conmemorativa en el marco del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad; un taller sobre el “Análisis del rol de la PDDH a los 25 años de los acuerdos de paz: necesidades e intereses estratégicos desde las Mesas Temáticas”, dirigido a integrantes de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad; además de participar con una ponencia en la capacitación sobre los avances de los derechos de las personas con discapacidad, dirigida a personal técnico del órgano judicial y Ministerio de Educación, solicitada por el Departamento de Coordinación de Atención Integral a Víctimas de la Corte Suprema de Justicia.

En ese mismo orden, el Departamento publicó material sobre promoción de derechos humanos, concretamente trípticos informativos del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, trípticos informativos sobre el proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre el informe inicial de El Salvador, aprobadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para publicación

▪ *Departamento de VIH y Derechos Humanos*

Durante el periodo a informar esta dependencia llevó a cabo una jornada sobre Derechos Humanos de las personas con VIH en el Curso Especializado en Prevención de las ITS/VIH/Sida y otros componentes de la Salud Sexual y Reproductiva, de la Asociación Demográfica Salvadoreña, dirigido a su personal técnico. De igual forma en materia de educación realizó 3 talleres sobre: a) “Estigma y Discriminación de VIH dirigida a personas que conforman la Red de Atención Integral y Continua de VIH de San Salvador”; b) Taller sobre Estigma y Discriminación de VIH dirigida a personal de diversas instituciones que conforman la Red de Atención Integral y Continua de VIH de San Miguel”; y c) Taller de manejo de cadáveres y los aspectos propios relacionados a las muertes por VIH dirigido a Delegadas y Delegados de esta Institución.

Asimismo se coordinaron otras actividades de difusión entre los que se destaca: acto conmemorativo del Ministerio de Salud sobre el Día Mundial de la Respuesta al VIH, en el cual participaron organizaciones de sociedad civil de personas con VIH, de población LGTBI, organismos internacionales de cooperación y entidades estatales; de igual forma se participó en la presentación del estudio sobre estigma y discriminación a personas con VIH de parte de CID-GALUP, dirigida a personas de organizaciones de sociedad civil de mujeres, de personas con VIH, de población LGTBI y a funcionarios públicos.

Del mismo modo se brindaron charlas sobre el trato e interrelación con el paciente con VIH dirigida a enfermeras, personal de trabajo social y médico del ISSS; charlas sobre Herramientas legales para protección de derechos humanos de personas con VIH, a estudiantes de comunicaciones de la Universidad de El Salvador y charlas en grupos de apoyo a personas con VIH de los 18 Hospitales de la red de salud

pública, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, para informar sobre derechos relacionados al VIH y mecanismos legales para hacerlos efectivos. En total, de todas estas actividades se beneficiaron a 678 personas: 476 mujeres y 202 hombres.

▪ *Procuradurías Adjuntas Específicas*

Con respecto a las acciones de promoción de los derechos humanos realizadas por las Procuradurías Adjuntas específicas, se destaca la realización de talleres, foros públicos, celebración de días conmemorativos, festivales y capacitaciones de las temáticas pertenecientes a cada área; así como actividades relacionadas con participación en los medios de comunicación social, sobre todo radiales y televisivos, en los cuales se ha hecho promoción del mandato constitucional de la Procuraduría y de los derechos humanos de cada área específica de trabajo.

En ese sentido la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles, realizó diferentes acciones entre las cuales se destacan el Taller de Técnicas de entrevistas y primeros auxilios psicológicos a víctimas de desplazamiento y autocuido con Funcionarios Públicos; entrevistas sobre los derechos de la población LGTBI y Seguridad Ciudadana de las personas trans, entre otras.

De igual forma, tuvo a su cargo la celebración de días conmemorativos, tales como: el Día Internacional de Derecho a la Verdad, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Día del Orgullo LGTBI, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Día Internacional de Personas Desaparecidas, Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, Conmemoración en Memoria de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y Día internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 35 Aniversario de la Conmemoración de las Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Por su parte, en el periodo a informar, la Procuraduría Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dado a conocer su labor de promoción y apoyo a distintas instituciones, impartiendo las siguientes ponencias: “La investigación de las vulneraciones al derecho humano a la salud”, dirigida a personal médico del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS; “Derechos Humanos del personal policial”, dirigida a personal de la Inspectoría General de Seguridad Pública; “Bases fundamentales para una reforma de la justicia laboral en El Salvador”, organizado por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia; “La prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos”, organizado por el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, en coordinación con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Viceministerio de Prevención Social; Ponencia introductoria durante el evento de presentación del Estudio Estigma y Discriminación asociados al VIH, organizado por PDDH, USAID/PASCA; y “Situación de los derechos de las mujeres”, en el marco del evento organizado en ocasión del Día Internacional de la Mujer por la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo Comunal de Metapán de R.L.

Asimismo, se distribuyó material institucional durante la presentación del Cuarto Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada y en visita a los centros de personas adultas mayores.

En cuanto a la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, realizó actividades de promoción enfocadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de la institución; por medio de un “Taller sobre medicina forense y criminalística aplicada a la investigación del derecho a la vida” con el objetivo de que personal jurídico de la sede central y delegaciones departamentales apliquen los conocimientos adquiridos, la

técnica y metodología, al analizar casos de procedimientos policiales, medico forenses y fiscales en la investigación del delito, para garantizar los derechos humanos.

Referente a las acciones realizadas por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, estas se enfocaron principalmente a la participación del personal en: a) taller sobre el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estándares en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia y derechos sexuales y reproductivos”; b) Reunión Regional sobre Prevención y respuesta a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”; c) Foro “Violencia y Protección Jurídica de los jóvenes migrantes en el triangulo Norte de Centroamérica; d) Foro “Jóvenes por la Paz”; e) Lanzamiento de Proyecto “Fortalecimiento de los programas de inserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los países del SICA”; y f) Curso de OIM sobre Niñez Migrante.

Por otra parte entre las actividades reportadas por la Procuraduría Adjunta de la Mujer y la Familia, se cuenta con la realización de una feria empresarial, con el objeto de brindar un espacio de promoción, comercialización y negociación de productos ofrecidos por mujeres emprendedoras; además se llevó a cabo la presentación de la Obra de Teatro denominada “Maskaras”, por parte del grupo de Teatro Libre Independiente, la cual tuvo como objetivo el desmontaje de masculinidades.

De igual forma se llevó a cabo la presentación del Informe Especializado sobre Acceso a la Justicia en casos de Violencia de Género; además de realizar el foro para la presentación a las instituciones que componen el Sector Justicia, del proyecto “Apoyo en la Promoción de la Justicia Especializada para las Mujeres en El Salvador 2016-2018.

Finalmente y en apoyo con otras instituciones se participó en a) el foro “Avances y desafíos

institucionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; b) Capacitación en tema electoral en coordinación con ANDRYSAS; y c) ponencia “Embarazo en niñas y adolescentes en El Salvador, una forma de violencia y vulneración de derechos humanos”.

4.3 Fortalecimiento institucional

La PDDH a partir de su planificación estratégica, aspira a fortalecer organización y funcionamiento interno, con base en la filosofía, doctrina y normativa de los derechos humanos, a través de políticas y procedimientos administrativos eficientes y eficaces, en orden a brindar un servicio integral a la población; el uso austero de los recursos y la equidad en las relaciones laborales.

En ese sentido, la actual administración ha definido como objetivo estratégico la adopción de un modelo de gestión y una cultura organizacional que garanticen servicios a la población en coherencia con el mandato, los valores institucionales y un ambiente laboral respetuoso de los derechos humanos.

Las unidades institucionales que les corresponde cumplir con las actividades vinculadas a este eje estratégico son: Secretaría General, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, Departamento de Comunicación y Prensa, Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos, Unidad de Acceso a la Información Pública y Procuradurías Adjuntas. A continuación, el resumen de las actividades y logros alcanzados por dichas unidades organizativas en el período que comprende este informe.

a) Secretaría General

Es la responsable de la dirección administrativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y como órgano de comunicación interna y externa de la entidad

apoya en la preparación, registro y control de los Acuerdos Institucionales, así como en el resguardo y distribución interna y externa de los mismos y de los documentos y correspondencia institucional.

Tiene como objetivo principal cumplir las atribuciones que señala el Manual de Organización y Puestos de la institución, contribuye a la gestión y control de las labores administrativas, brindando asistencia adecuada para cumplir las directrices emanadas de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.

Según el organigrama institucional aprobado en el mes de marzo de 2017, de Secretaría General dependen: el Departamento de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, Departamento Administrativo, Departamento de Tecnologías de Información, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Gestión Documental y Archivo, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y labores de coordinación con la Unidad Financiera Institucional

Entre los principales esfuerzos llevados a cabo por esta dependencia se puede mencionar la certificación de 94 expedientes institucionales, así como 75 Acuerdos Institucionales. Además de realizar 3 visitas a las Delegaciones Departamentales PDDH y 10 sesiones con otras dependencias, para coordinar las actividades administrativas y financieras de la institución.

Asimismo realizó otras actividades tales como la administración del servicio de telefonía celular a nivel nacional para el funcionariado de la PDDH y la supervisión del servicio de correspondencia y el de reproducción a fin de dar una respuesta oportuna.

b) Departamento de Recursos Humanos

Entre los principales logros se encuentra la entrega de los diferentes beneficios e incentivos

para todo el personal de la PDDH (útiles escolares, guardería, anteojos, canasta básica y reconocimiento por su labor al personal de la Institución), los cuales a pesar de los inconvenientes presupuestarios de los cuales ha sido objeto la Institución, no han tenido ningún retraso en la entrega de los mismos.

• **Capacitaciones**

Con la finalidad de optimizar el servicio a las personas usuarias e integrar al personal institucional de las diferentes dependencias, este departamento enfocó sus esfuerzos en capacitar al personal institucional en el área de salud, con el objeto de disminuir las licencias por enfermedad, lo cual vendría a optimizar el trabajo dirigido hacia la población salvadoreña.

En ese sentido desde el segundo semestre de 2016 hasta la fecha de este informe, se impartieron 11 capacitaciones en las áreas de Envejecimiento saludable, Enfermedades Gastrointestinales, Infecciones respiratorias agudas, Prevención del lumbago, Club de hipertensión arterial, Club de diabetes mellitus II, Prevención de cáncer de mama, Lesiones deportivas y Autocuidado personal; beneficiando a un total de 147 personas técnicas, administrativas y operativas (58 hombres y 89 mujeres).

Asimismo en cumplimiento del mandato constitucional, en el primer trimestre del año 2017 se implementó la capacitación en Lenguaje de Señas la cual fue dirigida al personal técnico institucional; debido a que son las personas que tienen contacto directo con la población.

• **Otras actividades destacadas**

A pesar de los impactos generados por el recorte presupuestario, la administración institucional ha seguido otorgando los beneficios que establece el Contrato Colectivo de Trabajo sin inconveniente alguno, asimismo se pretende

realizar alianzas con otras Instituciones a efecto de realizar capacitaciones en cada una de las áreas que sean necesarias a efecto de potencializar al personal en sus conocimiento y habilidades.

c) Departamento Jurídico

Durante el período en referencia, este Departamento emitió diversas opiniones jurídicas a requerimiento de las distintas dependencias institucionales, siendo las más significativas las relacionadas a: a) Contrato Colectivo de Trabajo y presupuesto anual; b) Ejecución de contratos; c) Prestaciones laborales; y d) Elaboración de instrumentos normativos internos.

Asimismo a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones elaboró 22 contratos de adquisición de obras, bienes y servicios; además de iniciar dos procedimientos de deducción de responsabilidades administrativas.

Igualmente realizó otras actividades relevantes tales como participar en la Comisión designada para revisar la normativa institucional, cuyos resultados inmediatos fueron la emisión del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos, y del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; así como la revisión de acuerdos y convenios de cooperación interinstitucionales y la intervención en procesos judiciales y administrativos.

d) Departamento de Comunicaciones y Prensa

En el periodo del presente informe, el departamento apoyó e impulsó diversas actividades institucionales, además de realizar labores de incidencia del mandato de la Procuradora a través de estrategias puntuales. Dichas actividades fueron programadas por el Despacho de la señora Procuradora,

Procuradurías Adjuntas específicas, Escuela de Derechos Humanos, Departamentos y/o Unidades Especializadas, así como Delegaciones Departamentales.

Del mismo modo, ha mantenido relaciones con diversos medios de comunicación nacional e internacional, así como con instituciones estatales y no gubernamentales; además de hacer uso efectivo de la tecnología; lo cual generó insumos y espacios informativos, produciendo logros tales como: 61 entrevistas en radio y televisión; 43 conferencias de prensa; 57 Pronunciamientos y Comunicados institucionales y la cobertura de actividades de relevancia especial o fechas conmemorativas llevadas a cabo por la institución.

e) Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos

Este departamento, en coordinación con otras dependencias, continúa con la revisión y actualización de normativa e instructivos institucionales tales como: El Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Asimismo ejecutó el seguimiento para el Plan Operativo Anual 2016 y el Plan por área de Gestión del período de julio a diciembre de 2016; además de coordinar y consolidar el Plan Anual institucional 2017, aprobado para la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y divulgado al personal institucional.

De igual forma, se llevó a cabo capacitaciones de planificación dirigidas a 122 personas, incluyendo a los Procuradores y Procuradoras Adjuntas, jefaturas y personal técnico y administrativo y conjuntamente se coordinó con las Procuradurías Adjuntas la elaboración de perfiles que permitan la búsqueda de financiamiento de proyectos que no se pueden ejecutar con fondos GOES, además de realizar reuniones de coordinación para la programación de actividades de trabajo con los cooperantes y/o países amigos para la presentación de iniciativas a recomendación de la titular de la

institución y de ejecutar monitoreo y evaluación de la ejecución de proyectos para los análisis de seguimiento interno y para los cooperantes.

Por otra parte, se realizaron visitas mensuales a las diferentes unidades técnicas de la institución para evaluar necesidades y/o requerimientos que puedan apoyar al desempeño de sus planes de trabajo, por medio de la ejecución de proyectos.

f) Unidad de Acceso a la Información Pública

A la Unidad de Acceso a la Información Pública le corresponde sistematizar la información institucional, a través de la recopilación y actualización de datos provenientes de las diferentes unidades o departamentos que la conforman, con el fin de garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información y contribuir con la transparencia de las actuaciones de esta institución. En el período se han recibido 99 solicitudes de información de manera electrónica y personal; de las cuales 50 fueron presentadas por mujeres y 49 por hombres, de éstas el 100.0 % fue entregada en el plazo establecido u acordado con el solicitante de acuerdo con los requisitos de Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Asimismo, la información más requerida por las personas usuarias, es la relacionada a datos estadísticos sobre las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las diferentes instituciones del Estado, así también la información referente al rubro financiero de la institución e informes de labores.

De la misma forma, en diciembre de 2016 se participó en el foro "Acceso a la Información Pública y Probidad, hacia un Estado más Transparente", con el objeto de dar a conocer los proyectos y lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para con las Unidades de Acceso de Información de las diferentes instituciones del país. De igual forma se participó en la Feria denominada "Taller de buenas Prácticas en Transparencia y Acceso a la

Información”, organizada por la El Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP y USAID, la cual tuvo como finalidad, de dar a conocer el trabajo realizado por las Unidades de Acceso a la Información Pública dentro de las instituciones públicas del país.

Por otra parte, en el mes de abril de 2017, se realizó jornada de capacitación del proceso de solicitudes y la clasificación para declarar reserva de documentos, realizada en la Escuela de Derechos Humanos, con la participación de veinticinco empleadas y empleados PDDH.

g) Procuradurías adjuntas específicas

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos**

Las acciones de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos (PADH) contempladas en el Plan Operativo Anual 2016 y Plan Anual Institucional 2017, se enmarcan en la función principal de supervisar el funcionamiento de los Departamentos del Sistema de Tutela y las Delegaciones Departamentales.

En este sentido, y con el propósito de fortalecer el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, la PADH definió iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer el nivel de respuesta de dicho sistema, las cuales se han venido impulsado progresivamente.

Estas iniciativas incluyen la promoción de reformas a la Ley y Reglamento de la PDDH, así como la revisión y reforma de normativa institucional relativa a los procedimientos de asistencia y protección; el fortalecimiento de los procesos de coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación del Sistema de Protección de Derechos Humanos; la construcción e implementación de parámetros para la reducción progresiva de la mora institucional; el desarrollo del nuevo Sistema Informático Integral de Gestión; el monitoreo

y sistematización de avances en el proceso de descentralización de firma de pronunciamientos y oficios; y la participación en espacios con sociedad civil, instituciones del Estado, Organismos internacionales y usuarios de los servicios institucionales, entre otros.

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.**

Esta Procuraduría informa para el presente periodo que dentro de sus principales logros se encuentra la presentación y revisión de la Política Institucional de Igualdad de Género, así como la conformación e impulso de la Comisión Institucional de Seguimiento a dicha Política. De igual forma y en sus esfuerzos por armonizar la normativa interna de la institución con la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) elaboró y presentó el “Protocolo de atención a casos internos sobre violencia y discriminación contra la mujer”

La finalidad de dicho Protocolo es definir y facilitar una ruta de atención para el abordaje de los casos internos sobre violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres; así como relacionar los mecanismos de denuncia, investigación, sanción y seguimiento que procuren una atención efectiva a las mujeres que enfrentan casos de violencia y discriminación por razones de género en la PDDH.

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales**

En el periodo a informar esta Procuraduría participó en espacios diversos, tales como planificación institucional, talleres, entre otros. En este contexto se destaca la realización de dos jornadas de trabajo en el taller denominado “Técnicas de entrevistas y primeros auxilios psicológicos a víctimas de desplazamiento

y autocuido con Funcionarios Públicos”, el cual forma parte del Convenio Marco de Cooperación entre la PDDH y Cristosal; mismo que pretende fortalecer las capacidades técnicas de las personas responsables de la atención y protección a personas y familiares víctimas de violaciones a derechos humanos, violencia y delitos graves.

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.**

Uno de los principales logros informados por esta Procuraduría ha sido el Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la atención a víctimas migrantes con enfoque de derechos”, el cual ha fortalecido al Departamento de Atención a las Personas Migrantes, ya que se le proporcionó equipo informático y cuenta con personal idóneo para atender las necesidades de la población migrante: dos profesionales de la psicología y dos abogados.

En ese mismo sentido y con el auspicio de ACNUR se firmó una Carta de Entendimiento entre dicho Organismo y esta Procuraduría, lo que ha permitido modernizar las instalaciones del Departamento en mención, además de contar con las condiciones adecuadas para la atención de las víctimas y familiares, inclusive se tiene una sala lúdica para niños y niñas, además de mantener el compromiso entre las partes de realizar acciones conjuntas de incidencia y protección a favor de las víctimas del desplazamiento interno por violencia, personas refugiadas, solicitantes de asilo y víctimas en los flujos migratorios mixtos.

Por otra parte, es importante destacar el desarrollo del primer “Taller sobre medicina forense y criminalística aplicada a la investigación del derecho a la vida”, con el auspicio de CECACE; el cual fue dirigido al personal

jurídico de la sede central y de las Delegaciones Departamentales que realiza labor de tutela en la investigación de casos de graves violaciones al derecho a la vida. Dicho taller se realizó con la finalidad de que las personas participantes apliquen los conocimientos adquiridos, la técnica y metodología, al analizar casos de procedimientos policiales, medico forenses y fiscales en la investigación del delito, con el objeto de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, acceso a la justicia y debido proceso de las víctimas.

Asimismo el personal de esta Procuraduría se capacitó en el Curso interno Básico de Derechos Humanos, además de participar en el Taller de la Comisión Interamericana para Funcionarios Estatales e iniciar el proceso de capacitación de curso de Lenguaje de Señas.

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes**

En el período de este Informe esta Procuraduría brindó insumos relacionados a los “Desafíos y Retos de PADNJ frente a los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz” y el “Programa Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia”; de igual manera dio aportes en cuanto al Sistema Informático Integrado de Gestión y las reformas a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Por otra parte sostuvo reuniones de trabajo con las distintas áreas con el objeto elaborar el Informe de Seguimiento a la Matriz por Área de Gestión II semestre de 2016 y elaborar el Plan de Trabajo Institucional de Justicia Penal Juvenil 2016-2020; así como con la dirección de la Escuela de Derechos Humanos para conocer el Plan Nacional de Promoción; además de asistir a la presentación del Protocolo para la atención a casos internos de violencia contra la mujer.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la participación del personal en: a) taller sobre el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estándares en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia y derechos sexuales y reproductivos”; b) Reunión Regional sobre Prevención y respuesta a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”; c) Foro “Violencia y Protección Jurídica de los jóvenes migrantes en el triángulo Norte de Centroamérica; d) Foro “Jóvenes por la Paz”; e) Lanzamiento de Proyecto “Fortalecimiento de los programas de inserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los países del SICA”; y f) Curso de OIM sobre Niñez Migrante.

- **Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales**

Con respecto al fortalecimiento institucional esta Procuraduría ha concentrado sus esfuerzos en las acciones relativas a la planificación de actividades, la evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo del área, la participación en el Consejo Consultivo, la participación en talleres sobre la reforma a la normativa interna, la preparación de observaciones a la propuesta de reforma a la Ley de la PDDH y el apoyo al Despacho en las reuniones con el SEPRODEHES y personal del Departamento de Transporte.